UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS POLITICAS

ESCUELA DE DERECHO

**TITULO: ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL CASO PEDRO VERA VERA y
OTROS VS. ECUADOR**

**TESIS DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DEL ECUADOR**

AUTORA: JESSICA ALEXANDRA LÓPEZ MUÑOZ

DIRECTORA DE TESIS: DRA. NORMA PEÑAHERRERA GUACHAMIN

QUITO - 2015

CERTIFICACIÓN

Yo, Jessica Alexandra López Muñoz, portadora de la cédula de ciudadanía No 1713500641, egresada de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Internacional del Ecuador, declaro que soy la autora exclusiva de la presente investigación y que esta es original, auténtica y personal mía. Todos los efectos académicos y legales que se desprenden de la presente investigación serán de mi sola y exclusiva responsabilidad.

Quito, febrero 2015

Jessica Alexandra López Muñoz.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi Padre Celestial por darme la oportunidad de vivir, a mis padres por su esfuerzo diario y constante, quienes me han enseñado a ser una mejor persona y, a mi tutora de tesis la Dra. Norma Peñaherrera por su esfuerzo y tiempo para ayudarme a sustentar esta tesis, que gracias a ella he podido realizarla.

No puedo dejar de agradecer a las autoridades de la Universidad quienes hacen lo posible para ayudar a los estudiantes a salir adelante en el camino académico.

DEDICATORIA

Esta tesis dedico a la persona que más admiro, al ser que me enseñó lo bueno y lo malo, quien luchó por mí en mi niñez, quien me enseñó a perseverar en mi adolescencia y quien me ayuda a emprender los más grandes retos en el presente, mi padre, mi alimento para vivir, aquel que tiene esperanza en mí.

Aquella persona que siempre veré como el ser más bueno que he conocido, gracias a mi padre he podido salir adelante aunque yo no he estado en sus noches de desvelo de angustia y de sufrimiento, él siempre ha estado en las mías.

SINTESIS.-

Durante el desarrollo del presente trabajo se analizarán todas las circunstancias de hecho y de derecho que tienen relación al caso Pedro Vera Vera y otras vs Ecuador, y su connotación jurídica a nivel nacional, así como en la Corte Interamericana de Derechos.

Dentro de la investigación se describirán las funciones y facultades de los órganos de Derechos Humanos que conocieron y resolvieron el tema. También se establecerán las circunstancias dentro de las cuales se cometieron las infracciones juzgadas, y las pruebas que fueron analizadas dentro del proceso.

Más adelante se realizará un estudio pormenorizado de la resolución final del caso, la reacción por parte del estado ecuatoriano, así como la ejecución de la sentencia.

También he incluido los criterios jurídicos sustentados en el análisis mencionado y en consideraciones de derecho que se han aplicado en base a las pruebas y circunstancias tomadas del caso.

ESQUEMA.-

El desarrollo del trabajo que estoy realizando a continuación se encuentra dividido en cuatro capítulos que contienen temas de apoyo cruciales para dicho estudio y se estructura de la siguiente manera:

PRIMER CAPÍTULO.- En éste se concreta qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para qué sirve, su historia y las garantías que este organismo presta; se expone definiciones y se determina las pautas para el desarrollo de los siguientes capítulos.

SEGUNDO CAPÍTULO.- En éste se define y se esclarece el caso que vamos a tratar aunque el tema es sobre la sentencia, es importante dar a conocer los sucesos pasados antes de la muerte del señor Pedro Vera Vera, para un mejor entendimiento del dictamen de la sentencia.

TERCER CAPÍTULO.- En éste se determina las razones del por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado Ecuatoriano con respecto al caso del señor Pedro Vera Vera; y además, por qué la Corte señala al Ecuador como responsable en la causa basado en los reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CONCLUSIONES.- Se resume la posición del Estado Ecuatoriano, y se amplía con un comentario analítico de la perspectiva del caso y la sentencia impuesta al Ecuador.

INTRODUCCIÓN.-

La problemática del mundo moderno nos lleva siempre a la vigencia de los Derechos Humanos, a su respeto y también a su vulnerabilidad, tanto por los particulares, como por los Estados.

Es importante resaltar el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que existe justamente para vigilar la vigencia de los mismos al interior de los Estados nacionales. Es una instancia que se crea para reclamar aquello que los Estados no garantizan, por falta o debilidad normativa o por dejar primar los intereses personales que no coinciden con los del bien común.

Dentro del caso Vera es importante destacar el papel del estado ecuatoriano frente a los derechos humanos y su defensa, su participación dentro del proceso a ser analizado y las medidas tomadas para mejorar la normativa interna y las instituciones encargadas del sistema de justicia, para investigar hechos similares que se producen con frecuencia, a fin de determinar responsabilidades.

El análisis de la sentencia del caso, a más de difundir los argumentos esgrimidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permitirá describir el marco institucional y legal del Ecuador en esta materia, tanto en lo referente a las instituciones de justicia, como a su funcionamiento, acorde con los instrumentos internacionales que sobre Derechos Humanos forman parte del bloque de constitucionalidad de la Ley suprema del Estado.

“ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL CASO PEDRO VERA VERA Y OTRA VS. ECUADOR”

CAPITULO I

1.1 Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los años cuarenta consistía en un régimen de corte declarativo, pues los Estados que lo mentaron no tenían gran interés en el desarrollo de un sistema ecuménico capaz de intervenir con incidencia en sus asuntos internos. Este sistema interamericano de promoción y protección de Derechos Fundamentales se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual se adoptó la propia Carta de la OEA que proclama los *“Derechos Fundamentales de la Persona Humana”* como uno de los principios en que se funda la Organización.¹

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conlleva una evolución en la toma de decisiones, para su análisis respecto a la posible aplicación de las normas humanitarias, puede hacerse referencia al artículo 33 de la Convención Americana, el cual establece que son competentes:

“para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Com IDH) como la Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH)”. Luego, el artículo 44 hace referencia al hecho de que *“cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente*

¹ **ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS COMISIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CORTE AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**, “Documentos básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano”, Secretaría General Organización de los Estados Americanos 1889 F St N.W. Washington D.C 20006 /2001. Pág. 3.

reconocida en uno o más estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”²

En virtud de esta norma, las peticiones ante la Comisión Americana de Derechos Humanos solo pueden recaer sobre violaciones a la Convención, lo que impediría a este órgano analizar violaciones del Derecho Internacional Humanitario en las peticiones presentadas.

En el concepto de los Derechos Humanos como Derechos frente al Estado, cabe destacar que se presentan como un mero conjunto de valores éticos que han pasado a formar parte de *una categoría normativa de la mayor importancia en cuanto a lo que constituye un comportamiento legítimo respecto de los órganos del Estado*. Los Derechos Humanos se han desarrollado como una garantía del individuo y los grupos más vulnerables dentro de la sociedad.³

La función del Derecho de los Derechos Humanos es diferente a la del Derecho Penal; como los agentes del Estado no pueden estar exentos del cumplimiento de la ley, *lo que rechaza es que el crimen se combata con el crimen y que se pretenda justificar los excesos cometidos en la represión del delito, o que se pueda utilizar del poder en forma contraria a los propósitos del Estado*.⁴

² SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL, Konrad Adenauer Stiftung, 2010, Berlín, Pág. 128.

³ FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor; INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, “El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, Aspectos Institucionales y Procesales” Segunda Edición, San José C.R. IIDH (Instituto Ecuatoriano de Derechos Humanos), 1999, Pág. 29.

⁴Cfr., Consideración que no ha escapado a la atención de la Corte, la cual ha expresado que “*toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y que el Estado debe garantizarle el Derecho a la Vida y a la Integridad Personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de derechos de los detenidos*” Ibid. Pág. 31.

No se trata apenas de un tema de mera competencia:

Si el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede abordar efectivamente infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), comenzando por el hecho de que la Convención Americana no es un estatuto normativo que contenga normas de Derecho Humanitario, el mismo sistema debe entrar a constatar cuestiones muy problemáticas, como si se acepta o no la existencia de un conflicto armado interno en Estados parte cuyos gobiernos la niegan – como es el caso de Colombia⁵

La evolución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se da en función de la posible aplicación de normas propias del Derecho Internacional Humanitario, cuando su fuente normativa, el “Pacto de San José”, se limita en principio a la aplicación de normas propias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero hoy, especialmente la Corte Interamericana, opta, por una conexión, en términos de complementariedad, entre el Derecho de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, entre la vida, la integridad, la dignidad, y la protección específica de las personas inmersas en cualquier conflicto.

1.2 Competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1.2.1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El surgimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se da con el antecedente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deviene con la Conferencia Interamericana que se efectuó en México en el año 1945, seguida de la Quinta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959 y retomada

⁵ SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL, Konrad Adenauer Stiftung, 2010, Berlín, Pág. 126.

con un nuevo proyecto en 1967 por el Consejo de la OEA. El Comité Jurídico Interamericano realiza un proyecto de la Declaración de Derechos Humanos, proyecto que fue sometido al Consejo de la OEA para realizar su análisis. Posteriormente, la Organización de Estados Americanos convoca a una Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual se reunió en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 y de la que nace la “Carta de Declaración de los Derechos Humanos”.

Se define a la Comisión como *“un órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia de los Derechos Humanos y servir como órgano consultivo de la organización en esta materia”*.⁶

La resolución más importante emanada de la Quinta Reunión de Consulta fue sin duda la referida a los Derechos Humanos; sin embargo, en la segunda parte de la resolución mencionada se crea la **“Comisión Interamericana de Derechos Humanos”**, con ella los Estados americanos subsanan la carencia de órganos encargados de resolver los asuntos concernientes a Derechos Humanos dentro del Sistema Interamericano. Esta parte de la resolución resuelve:

*“Crear una Comisión Interamericana que se compondrá de 7 miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, encargada de promover el respeto de tales derechos, la cual será organizada por el mismo Consejo y tendrá las atribuciones específicas que éste le señale.”*⁷

⁶ **ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS COMISIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CORTE AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**, “Documentos básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano”, Secretaría General Organización de los Estados Americanos 1889 F St N.W. Washington D.C 20006 /2001. Pág. 10.

⁷ Texto del Estatuto Original del Documento de OEA/Ser.L/V/II, 26 de Septiembre de 1960. Citado **ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS COMISIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CORTE**

No obstante, en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Punta del Este en Uruguay en el año 1962, se consideró la insuficiencia de las atribuciones y facultades previstas para el cumplimiento de los cometidos de la Comisión, por lo que se encarga al Consejo de la Organización la reforma de los Estatutos cuyo objeto sería ampliar y fortalecer sus atribuciones, tarea que se llevó a cabo en noviembre de 1965 en la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria que se celebró en Río de Janeiro, Brasil donde se resolvió:

1. Autorizar a la Comisión el examen de los documentos dirigidos al Gobierno de cualquiera de los Estados americanos, con el fin de obtener información que se considere importante para la formulación de recomendaciones y efectivizar la observancia de los Derechos Humanos fundamentales.
2. La elaboración de un Informe Anual dirigido a la Conferencia Interamericana o a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, donde se exponga el progreso alcanzado en los objetivos señalados por la Declaración Americana. En este informe se deben citar los campos de mayor relevancia en Derechos Humanos y la formulación de observaciones respecto a las comunicaciones o cualquier otra información.

Posteriormente, durante el periodo de sesiones celebrado en abril de 1966, se modifican los Estatutos otorgando a la Comisión la facultad de examinar peticiones individuales y formular recomendaciones específicas a los estados miembros. Considerando que la Tercera Conferencia Internacional Extraordinaria celebrada en Buenos Aires en 1967, aprobó la incorporación a la propia carta de la Organización con normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales. Dentro de los preceptos de esta convención en su Art. 41 se plantea que: la función principal de la Comisión es

efectivamente la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos; no obstante, en el mismo artículo se plantean las siguientes funciones y atribuciones de la Comisión:⁸

- a) *Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos americanos.*
- b) *Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados Miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;*
- c) *Preparar los estudios o informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones.*
- d) *Solicitar a los gobiernos de los Estados Miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;*
- e) *Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General formulen los Estados Miembros en cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos soliciten;*
- f) *Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de esta Convención; y,*
- g) *Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.*

En la medida en que el Sistema Universal de Derechos Humanos se fortalecía y proyectaba internacionalmente, toma impulso y se crea la Comisión Interamericana de

⁸ Texto de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Cit. "PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS (recopilados con ocasión del XXX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), Quito, 1978.

Derechos Humanos CIDH en el año 1959⁹; y, en 1969 se realiza la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹⁰ y como consecuencia su creación da paso a una Corte Regional Contenciosa con jurisdicción difundida.

Por citar un ejemplo, el autor Andreas Feldman, en la realización de un trabajo grupal ejecutado en Chile, planteó para lograr el objetivo de la aplicación de los fallos de la CIDH, *“la necesidad de promover reformas constitucionales, que propendan a generar mecanismos para asegurar la convergencia entre derecho interno y derecho internacional”*, determinación que facilitaría la usanza de las decisiones y sentencias emitidas por la CIDH, mediante las instituciones los organismos del Estado.

Finalmente, la creación de instituciones nacionales de derechos humanos serviría como contribuidor en la aplicación de la normativa impartida en los fallos de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y la consolidación de los compromisos establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hoy por hoy, existen un poco más de 100 comisiones en diversos países del mundo, de estos varios forman parte del SIDH, el propósito de las mismas es la promoción de las normas internacionales domésticamente, mediante la difusión de sus preceptos.

⁹ La **Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)** fue creada por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. La CIDH fue formalmente establecida en 1960, cuando el Consejo de la Organización aprobó su Estatuto. Su Reglamento, sancionado en 1980, ha sido modificado en varias oportunidades, la última de ellas en 2006.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos del Sistema Interamericano responsables de la promoción y protección de los derechos humanos. Está integrada por siete miembros, elegidos por la Asamblea General, quienes ejercen sus funciones con carácter individual por un período de cuatro años, reelegibles por una sola vez. http://www.oas.org/es/acerca/comision_derechos_humanos.asp.

¹⁰ La **Convención Americana sobre Derechos Humanos** (también llamada **Pacto de San José de Costa Rica** o **CADH**) fue suscrita, tras la *Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos*, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.

La Convención Americana de Derechos Humanos plantea una protección al establecer un mecanismo a través del cual se puede interponer una denuncia contra el Estado que viole un compromiso internacional de resguardo a los derechos humanos. Este instrumento internacional tiene como finalidad orientar a las legislaciones a la capacidad del goce y ejercicio de sus derechos en materia de Derechos Humanos.

1.2.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como ya se planteó en el tema anterior, la idea de establecer una corte para proteger los derechos humanos en las Américas surgió en la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia, 1948), en la que se adoptó la Resolución XXXI denominada: “*Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre*”, en esta se consideró que la protección de esos derechos “*debe ser garantizada por un órgano jurídico, como quiera que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente*”.

En consecuencia, encomendó al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de un proyecto de estatuto para la creación de una Corte Interamericana destinada a garantizar los derechos del hombre. El Comité Jurídico Interamericano, en su Informe al Consejo Interamericano de Jurisconsultos de 26 de septiembre de 1949, consideró que “*la falta de derecho positivo sustantivo sobre la materia*” constituía “*un gran obstáculo en la elaboración del Estatuto de la Corte*”, y que lo aconsejable sería que una convención que contuviera normas de esta naturaleza precediera al Estatuto, estimando que el Consejo de Jurisconsultos debería proponer tal solución a la X Conferencia Interamericana.¹¹

¹¹ ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS COMISIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CORTE AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Documentos básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano”, Secretaría General Organización de los Estados Americanos 1889 F St N.W. Washington D.C 20006 /2001. Pág. 12

A partir de la instalación de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, en 1979, se ha construido una verdadera doctrina sobre reparaciones, que va mucho más allá de la simple reiteración de las medidas indemnizatorias tradicionales.¹² El papel que la Corte ha desarrollado por más de veinte años le ha merecido un reconocimiento como máximo Tribunal para la Defensa de los Derechos Humanos en el Continente Americano.

No obstante se critica fuertemente el grado de cumplimiento de sus sentencias definitivas, según la doctora **María Carmelina Londoño Lázaro**, algunos de los factores que inciden en ello, son:

“(...) la subsidiaridad del Sistema que va relacionado al cumplimiento de los fallos de forma interna en cada país miembro, la falta de vigilancia en el cumplimiento de las sentencias, la ausencia de mecanismos de coacción, las trabas procesales entre otros; por otro lado los asociados con el contenido de las decisiones como son: la reparación integral de los daños provocados, la satisfacción del cumplimiento de las decisiones y las garantías de no repetición; y, por último como un eje transversal los mecanismos internos previstos para el cumplimiento de las sentencias”.

La Corte tiene función jurisdiccional y consultiva. En lo que a la función jurisdiccional se refiere, sólo la Comisión y los Estados partes en la Convención que hubiere reconocido la competencia de la Corte están autorizados para someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la Convención Americana a condición de que se haya agotado el procedimiento que debe tener lugar ante la Comisión y que se encuentra previsto en los artículos 48 a 50 de ese Tratado.

¹² LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Un cuarto de Siglo: 1979-2004”, EDITORAMA S.A., Primera Edición, 2005. Pág. 90.

En cuanto a la función consultiva de la Corte, la Convención Americana prevé en su artículo 64 que cualquier Estado miembro de la Organización puede consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.

Queda claro que la Comisión y los Estados parte son los únicos autorizados a presentar los casos ante la Corte Interamericana, que la misma debe decidir sus fallos en un periodo de tres meses, sin embargo en este plazo pueden presentarse diversas circunstancias que interrumpen su curso y hagan necesario inclusive la elaboración de un nuevo informe, provocando que se dilate este proceso.¹³

Si el papel que desempeña la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no satisface las expectativas en la resolución de una causa, de deberá analizar a que se debe puesto que tal vez dicho organismo está relacionado con factores externos que no le permiten cumplir cabalmente su cometido o quizá la demora en sus apreciaciones se debe simplemente a desorganización. Este tema como eje principal se debería tratar dentro del mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos con especial atención, para lograr que su aporte sea valioso en la solución de los conflictos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Para concluir, la Corte Interamericana extiende su función consultiva hacia todos los Estados que forman parte de la Organización Regional, dentro del marco de su competencia contenciosa, vincula a los Estados parte en los casos concretos; de igual manera, en el ejercicio de su función contenciosa, condena a los Estados miembros cuando se ha violado derechos o libertades reconocidos por la Convención. Esto, pone de manifiesto la enorme importancia de la jurisdicción Interamericana su relieve actual y su notable potencialidad en la región.

¹³ FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, "EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: ASPECTOS INSTITUCIONALES Y PROCESALES", Segunda Edición, San José C.R. IIDH (Instituto Ecuatoriano de Derechos Humanos) 1999, Pág. 349.

1.3 Sujeción del Ecuador a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La sujeción del Ecuador se presenta sin reserva alguna, dejando a salvo la facultad general contenida en la Convención Interamericana Sobre los Derechos Humanos, que constituye la libertad a ratificar la misma. Esta sujeción se da a partir de la Convención efectuada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, y se proclama mediante Decreto Supremo No. 1883, publicado en Registro Oficial 452 de 27 de Octubre de 1977.

Posterior a ello, el 24 de julio de 1984 proclama un reconocimiento de los artículos 45 y 62 de la misma Convención, mediante el Decreto No. 2768, publicado en el Registro Oficial No. 795 de 27 de julio del mismo año. Para complementar aquello, el Ministerio de Relaciones Exteriores formula una declaración con fecha 30 de julio de 1984 la que, de acuerdo a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 45 de la Convención, faculta al Gobierno del Ecuador al reconocimiento de la Comisión a recibir y examinar las comunicaciones que un Estado parte alegue para con otro de los Estados que haya incurrido en violaciones de los derechos humanos.

Según lo prescrito en el primer párrafo del artículo 62, el Gobierno Nacional reconoce como *obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial*, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendiéndose en los casos relativos a la interpretación o aplicación de lo establecido en la Convención.

Con esto el Ecuador ratifica este reconocimiento de competencia, lo realiza por un plazo indeterminado y con la condición de reciprocidad, lo que quiere decir que se reserva la facultad de retirarse del mismo cuando lo considere necesario.

Posterior a su ratificación el Ecuador ha de incluir los derechos humanos dentro de su legislación. Actualmente en la misma Constitución de la República del Ecuador 2008,

determina los derechos humanos como eje de la ejecución de sus normas, tal es que en su *Título II DERECHOS*¹⁴, ya habla de principios de aplicación de los derechos, derechos del buen vivir, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la naturaleza, derechos de protección y responsabilidades, todo con sujeción a las normas establecidas en preceptos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos, como es el caso de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos.

El Ecuador como país independiente, libre y soberano, voluntariamente accede a formar parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, acogiendo de esta manera a sus preceptos y sometiéndose de igual modo a las decisiones que sobre casos de violación de los derechos humanos que se podrían presentar. Otorgándose de este modo la facultad de denunciar ante la Comisión Interamericana encargada de receptor los casos y de que esta los presente ante la Corte Interamericana para su resolución, y obligándose igualmente al cumplimiento de las normas impuestas.

1.4 Tratados, Convenciones y Convenios sobre Personas Privadas de la Libertad.

Los tratados internacionales revisten múltiples formas, son también denominados convenios y convenciones, acuerdos, actas, protocolos, actos y protocolos adicionales, pactos, concordatos, etc.

Usualmente, se llama tratados contratos los que regulan materias que afectan directamente a las partes intervinientes, como los relativos a límites, alianzas, relaciones comerciales; y, se denomina tratados-leyes los que adoptan reglas o normas de Derecho en

¹⁴ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008, modificado el 13 de julio de 2011.

una materia común, como unificación de Derecho Internacional Privado o declaración de derechos individuales.¹⁵

a) **Declaración Universal de Derechos Humanos.**

Como nota introductoria se puede decir que luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. A raíz de esto nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DHUH) como un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco de 1945.

En lo relacionado con las personas privadas de libertad arbitrariamente, el Art. 9 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre expresa lo siguiente: ***“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”***¹⁶, la legislación Ecuatoriana, protege y regula lo relacionado a los Derechos Universales que se encuentran contemplados en ésta declaración y concretamente lo establece en la Constitución de la República en el artículo 77, numerales 1 y 2, donde se manifiesta:

“1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley (...)2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en

¹⁵ Df. Tratado Internacional. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS”, Editorial HELIESTA.

¹⁶ DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Convenio 0, Registro Auténtico 1948 de 10 de diciembre de 1948.

*juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos.”.*¹⁷

b) Convención Interamericana sobre Derechos Humanos:

En el Art. 7 de ésta convención se enuncia el Derecho a la Libertad Personal, y se enumeran 7 preceptos:¹⁸

1. *Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.*
2. *Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.*
3. *Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.*
4. *Toda persona detenida y retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella*
5. *Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez y otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su competencia en el juicio.*

¹⁷ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, artículo 77, Capítulo Octavo, Derechos de Protección, numerales 1 y 2. Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008.

¹⁸ CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Acuerdo Ministerial 202, Registro Oficial 801 de 06 de Agosto de 1984.

6. *Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.*

7. *Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.*

Los numerales de éste artículo son muy claros y generales, su direccionamiento está encaminado a la privación de la libertad, en estos se detalla su aplicación mediante la conexión de lo establecido con las leyes internas de cada país, se nombra en varios de los numerales a la Constitución Política de los Estados, como es más comúnmente conocida la Constitución dentro de los territorios, se define también frente a quienes se realizarán las denuncias de violación de los derechos humanos haciendo alusión a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana.

c) Convenio Interamericano para Prevenir y Sancionar la Tortura

En el Art. 2, de este convenio se define a la tortura y dice lo siguiente:

“Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como

castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las personas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a estas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.”.¹⁹

Frente a este artículo se podrían plantar las siguientes interrogantes: ¿Cuándo definir a un acto como tortura? ¿Cómo determinar si no se está realizando una tortura sobre aquella persona? ¿En qué casos es correcta la detención? ¿Qué legislación prima o es aplicable? ¿En qué punto de una denuncia se determina si es asunto interno o si se está violentando convenios internacionales?

El objeto de esta normativa es mantener la eficacia de que en todo Sistema se resguarde los preceptos de la lucha contra la tortura y los tratos crueles hacia las personas, pues estos actos resultaban denigrantes.

d) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Art. 9 de este Pacto detalla la libertad y la seguridad personales, dentro de los 5 numerales que contiene, generaliza la a detención de las personas privadas de la libertad.²⁰

¹⁹ CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, Codificación 1267, Registro Oficial Suplemento 153 de 25 de noviembre de 2005.

²⁰ Texto del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, Cit. “PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS (recopilados con ocasión del XXX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), Quito, 1978.

1. *Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.*
2. *Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación contra ella.*
3. *Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.*
4. *Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal.*
5. *Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.*

El texto de los numerales que anteceden, al igual que en el Convenio Interamericano sobre los Derechos Humanos se encuentra explícito de forma general y contiene indicaciones que relacionan a sus numerales con legislación de los Estados miembros, pues para concretar lo establecido en éstos se deberá acudir, en el caso de Ecuador, a lo

tipificado en todos los casos referentes a la privación de libertad por el Código Penal y por el Código de Procedimiento Penal. Nuevamente queda la duda de si para determinar que se ha cometido una violación de derechos establecidos en este Pacto, es necesario el análisis de juristas especializados en temas de Derecho Internacional y especialmente de Derechos Humanos, lo que se quiere decir es que no cualquiera que se sienta afectado y no por cualquier caso debería acudir a instrumentos internacionales para la resolución de su afectación.

En el artículo 10 por otra parte, se detalla el tratamiento o condiciones en las que se encontrarán las personas que ya han sido privadas de su libertad:²¹

1. *Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.*
 - a) *Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;*
 - b) *Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.*

2. *El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.*

²¹ *Ibíd.* Cit. 16.

Este artículo es muy interesante y en su análisis es necesario hacer referencia a si se cumple o no con su aplicación. Dentro del régimen Ecuatoriano, la detención de una persona en el sistema Procesal Penal, se efectúa por la acción emanada del Fiscal, más debido a falencias en el mismo proceso, en la práctica común se detiene a una persona con intervención de la policía violando una serie de derechos humanos, en la mayoría de los casos se aplica la violencia en el momento de la detención.

En sus numerales y literales, no se especifica en qué casos especialmente serán aplicados, tampoco se especifica si se complementarán con la legislación interna o si suplirán a la misma y por último en ellos no se establecen penas por su incumplimiento.

e) Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes.

Con respecto a la detención, esta Convención en su Art. 6 detalla los motivos bajo los cuales se procederá a la detención de una persona que hubiere cometido algún delito, y las garantías que la misma posee:²²

1. *Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán*

²² CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, Codificación 1246, Registro Oficial Suplemento 153 de 25 de noviembre de 2005.

solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.

- 2. Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.*
- 3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.*
- 4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.*

Al igual que muchos otros Convenios ya citados, esta Convención enuncia los preceptos referentes a la detención y los relaciona con las legislaciones de cada uno de los países miembros para su aplicabilidad. Dentro de la detención descrita se brindan las garantías y facilidades que se le brindará al inculpado o inculpada en el momento de su detención, procurando de esta manera que éste o ésta no lleguen a sufrir ningún tipo de trato que pueda constituir tortuoso o degradante para su persona.

Realizando un análisis general, los convenios, declaraciones, convenciones, pactos y tratados que se enuncian en los párrafos anteriores, en referencia a las personas privadas de su libertad, lo que buscan es la mejor opción para ellos desde el momento de su acusación

hasta que se cumple con su detención, optando por brindar las garantías suficientes para que no se vulneren sus derechos y mucho menos se viole la generalidad de los Derechos Humanos.

CAPITULO II HECHOS, DILIGENCIAS Y PRÁCTICAS DEL CASO VERA VERA Y OTRA.

2.1 Demanda, peticiones.

2.1.1 Antecedentes.

Como antecedente es importante destacar como llega el caso VERA VERA Y OTRA VS ECUADOR como petición individual ante la Comisión Interamericana. Para entender el proceso en la legislación ecuatoriana se requiere el agotamiento previo de recursos, tal como lo dispone el artículo 46.1 de la Convención Americana. Los recursos cuyo agotamiento exige el Sistema Interamericano, son los de carácter jurisdiccional, mismos que deben ser conocidos por una autoridad judicial previamente establecida y deben tener fuerza ejecutoriada.

Los recursos internos que deben agotarse son responsabilidad del Estado que está siendo denunciado. No es necesario agotar todos los recursos disponibles en la jurisdicción nacional, sino solo aquellos que sean aptos para reparar efectivamente el daño que se está denunciando.²³

²³ Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párrafo 64.

Las excepciones previas al agotamiento de los recursos internos se dan en los siguientes supuestos:²⁴

1. Cuando no exista el debido proceso legal en la legislación interna del Estado denunciado.
2. Cuando, pese a existir los recursos en dicho Estado, no se le haya permitido a la víctima el acceso a los mismos para agotarlos.
3. Cuando, no obstante haberse permitido a la víctima el acceso a dichos recursos, el Estado se haya demorado en resolverlos son que exista una justificación para ello, es decir, cuando haya presentado un retardo injustificado.
4. Cuando la víctima no tenga los medios económicos para pagar un abogado o una abogada y el Estado no provea ese servicio de forma gratuito.

En el caso que está siendo analizado, existieron excepciones por la manera en que se presentó, puesto que nunca se dio el debido proceso interno en el Ecuador. A través del texto de la demanda, se conoce que el señor Pedro Miguel Vera Vera de 20 años de edad fue detenido el 12 de abril de 1993, luego de haber sido perseguido por un grupo desconocido de personas que lo sorprendieron delinquiendo e intentaban lincharlo, y mientras lo perseguían le propinaron un disparo de proveniencia desconocida, que lo deja herido y consecuentemente es detenido y puesto bajo custodia del Estado.

²⁴ MANUAL BÁSICO DE LITIGIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES, Editorial Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador, San Salvador-El Salvador, 2011. Capítulo dos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pág. 31.

Además el mismo 12 de abril de 1993, fue trasladado al Hospital Público de Santo Domingo de los Colorados, donde ingresó a la sala de emergencias las 20:20 horas y fue atendido por dos médicos de turno, quienes determinaron que se encontraba “en estado etílico y con herida por arma de fuego a nivel de la región torácica izquierda”.

El día 13 de abril de 1993, al mediodía, la presunta víctima fue dada de alta por otros tres médicos de turno, puesto que según su criterio, la herida de este no ameritaba hospitalización. Fue trasladado al Centro de Detención Provisional de Santo Domingo y al siguiente día el señor Vera Vera rindió declaración ante el Fiscal Décimo Primero de lo Penal de Pichincha, y el Jefe de la Oficina de Investigación del Delito de Santo Domingo de los Colorados, quien puso al señor Vera Vera a disposición del Presidente de la Sala de Sorteos.²⁵

Asimismo, ese día fue atendido por el médico de la Unidad Policial, quien certificó que la presunta víctima “*presentaba una herida por proyectil de arma de fuego, en hemitórax izquierdo, aparentemente sin mayores complicaciones y realizada antes de su detención*”.

El 14 de abril de 1993 la señora Vera Valdez, a través de un abogado, solicitó al Comisario Segundo Nacional de Policía de Santo Domingo de los Colorados, ordenara el reconocimiento médico legal de su hijo a fin de que se constatará su estado de salud y se dispusiera su internamiento en una clínica “*para que recibiera inmediata atención médica*”.

²⁵ Cfr. Oficio 93-686-OID-SDC-CP-1 del Jefe de la Oficina de Investigación del Delito de Santo Domingo de los Colorados dirigido al Presidente de la Sala de Sorteos, de 14 de abril de 1993, e informe policial 93-343 de la Dirección Nacional de Investigaciones, de 14 de abril de 1993.

*y, por lo tanto, se le salvara la vida, en virtud de que se encontraba detenido en los calabozos de la Policía de la ciudad”.*²⁶

El Comisario Segundo designó a dos peritos médicos para que estos realizaran el reconocimiento médico correspondiente, el cual se llevó a cabo ese mismo día con presencia de dicho Comisario. Mediante informe de esa misma fecha, los peritos mencionados señalaron que el señor Vera Vera sufrió una herida por arma de fuego, y recomendaron que se le *"sacara una radiografía para descartar lesiones definitivas, que se le extrajera quirúrgicamente el proyectil, que se le llevara un control médico permanente para evitar complicaciones y que se le otorgaran no menos de quince días de incapacidad, salvo que hubieren complicaciones”.*²⁷

El 16 de abril de 1993 la señora Mercedes Vera presentó un escrito, a través de su abogado, al Juez Décimo Primero de lo Penal de Pichincha a fin de que éste ordenara el traslado del señor Vera Vera desde los calabozos de la Policía de dicha ciudad hasta una casa asistencial para que le extrajera el proyectil de arma de fuego. Ese mismo día el mencionado juez ordenó el traslado del señor Vera Vera al Hospital Regional con la respectiva custodia policial, a fin de que fuera intervenido quirúrgicamente, y ordenó que se oficie al Jefe del Comando Policía y al Director del Hospital Regional, quien además debía informar sobre el estado del paciente en forma periódica durante el tiempo que permaneciera internado. Esta decisión también fue notificada al Fiscal en su despacho. Asimismo, en ese día el Juez Décimo Primero dictó auto cabeza de proceso en contra del señor Vera Vera, ordenó su prisión preventiva, giró la boleta constitucional de

²⁶ Cfr, Caso Vera Vera y Otros vs Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y costas, SENTENCIA DE 19 DE MAYO DE 2011, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia.

²⁷ Idem.

encarcelamiento y el oficio para su traslado al Centro de Rehabilitación Social de Varones de la Ciudad de Quito.

El mismo 16 de abril de 1993 el Jefe del Comando Rural de Policía de Pichincha No. 1 dirigió un comunicado al mencionado Juez Décimo Primero informándole que el médico de la unidad policial había manifestado que *"no se justificaba el traslado del detenido al hospital"*.²⁸

El señor Vera Vera permaneció en el Centro de Detención Provisional de Santo Domingo hasta el 17 de abril de 1993, fecha en que aparentemente se presentaron "los primeros síntomas de complicaciones recién el 17 de abril de 1993, a las 13:00 horas aproximadamente, que el señor Vera Vera fue trasladado nuevamente al Hospital de Santo Domingo de los Colorados, en el cual permaneció hasta el 22 de abril de 1993, cuando fue trasladado en ambulancia del Hospital de Santo Domingo de los Colorados al Hospital Eugenio Espejo de Quito, aparentemente "a solicitud del cuerpo policial", e ingresó a este último a las 14:55 horas. Una vez en dicho hospital, el señor Pedro Miguel Vera Vera no fue intervenido sino hasta que su madre consiguió, por sus propios medios y a falta de dinero, sólo dos de las cuatro pintas de sangre que le fueron solicitadas en esa institución médica.

El señor Vera Vera fue operado, alrededor de las nueve de la noche de ese día y falleció el 23 de abril de 1993, horas después de la operación, a causa de *"peritonitis y*

²⁸ Idem.

hemoperitoneo por laceraciones de vasos mesentéricos, mesenterio y asas intestinales, consecutivos a la penetración de proyectil de arma de fuego".²⁹

2.1.2 Demanda.

De acuerdo al Art. 1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, al enumerar sus deberes ésta redacta la *Obligación de Respetar los Derechos* de la siguiente manera:³⁰

1. *Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y Libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.*
2. *Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.*

2.1.3. Procedimiento Interno

Dentro del caso analizado, la petición inicial fue presentada ante la Comisión el 8 de noviembre de 1994 por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU. Recién el

²⁹ *Cfr.* Protocolo de autopsia 301-24-JI-PA-93 de Servicio Médico Legal, de 23 de abril de 1993 (expediente de anexos a la demanda, anexo 1, folio 2) Caso Vera Vera y Otros vs Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y costas, SENTENCIA DE 19 DE MAYO DE 2011, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Introducción de la Causa y Objeto de la Controversia. Párrafo 70.

³⁰ CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Acuerdo Ministerial 202, Registro Oficial 801 de 06 de Agosto de 1984.

6 de agosto de 2009 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de admisibilidad y fondo No. 82/09, en el cual declaró la admisibilidad del caso y formuló diversas recomendaciones para el Estado.

El Informe fue notificado al Ecuador el 24 de agosto de 2009. En el cual se detalla que luego de la presentación de cierta información por parte del Estado, el Ecuador no ha cumplido las recomendaciones formuladas en el informe de admisibilidad y fondo requerido por la Comisión.

Es por ello que la Comisión Interamericana decide someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana, mediante demanda en contra de la República del Ecuador del 24 de febrero de 2010, caso No. 11.535³¹, alegando *"falta de atención médica adecuada, el sufrimiento físico y psíquico y la posterior muerte de Pedro Miguel Vera Vera bajo custodia estatal"*, y adicionalmente señala que: *"los hechos aún no han sido esclarecidos ni los responsables identificados y sancionados"*.³²

La Comisión Interamericana, pide después de presentada la demanda, que se investigue al Estado Ecuatoriano por la violación de los artículos: 4.1 *"Derecho a la Vida"*, 5.1 y 5.2 *"Derecho a la Integridad Personal"*, los mismos que expresan:³³

³¹<http://www.cidh.org/demandas/11.535>

³² JURISPRUDENCIA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS, CASO VERA VERA, Resolución 0, Registro Oficial 530 de 08 de septiembre de 2011.

³³ CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Acuerdo Ministerial 202, Registro Oficial 801 de 06 de Agosto de 1984.

4.1 Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

5.1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

5.2 Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Según consta en la demanda, los artículos referidos fueron vulnerados por el Estado Ecuatoriano incumpliendo lo que establece el artículo 1³⁴ de la Convención Interamericana, que define la obligación de Respetar los Derechos y Libertades que contiene el mismo documento. También se alegó la violación de los artículos 8.1 referente a las “*Garantías Judiciales*” y el 25.1 de la “*Protección Judicial*”, que dicen:

8.1 “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

25.1 “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra

³⁴ Idem

actos que violen sus derechos fundamentos reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".

La Comisión solicitó que se declare que el Estado es responsable por la violación de los artículos anteriormente enunciados, en perjuicio de Francisca Mercedes Vera Valdez, Agustín Abraham Vera Vera, Patricio Rubén Vargas Vera, Johanna Vargas Vera y Francisco Rubén Vargas Balcázar, parientes cercanos del señor Pedro Vera Vera.

El señor César Duque, como Asesor Jurídico de la CEDHU, es quien en representación de las presuntas víctimas antes nombradas, presenta el escrito de solicitudes y argumentos ante la Corte Interamericana, solicitando que en base a sus exposiciones se declare la responsabilidad internacional del Ecuador por la violación de los artículos antes expuestos para que la Corte ordene las debidas reparaciones.

El Estado Ecuatoriano interpone a los alegatos presentados un escrito de excepción preliminar, observando en este, que no se ha realizado el agotamiento de los recursos de jurisdicción interna y rechazando su responsabilidad. Además expreso dentro de su contestación a la demanda que los gastos y montos compensatorios solicitados resultaban excesivos. Para continuar con la demanda el 2 de junio de 2010, el Estado acredita a los señores Erick Robert Garcés y a Rodrigo Durango Cordero como Agentes representantes del caso.

Es así como se presenta la demanda, de un caso suscitado en el año 1993, casi 16 años más tarde, en el que se establece la presunta violación a los derechos consagrados en la

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, con el alegato de no haber precautelado el derecho a la vida y a la integridad personal, con todo lo que esto, en la interpretación realizada por la Corte Interamericana, abarca.

2.2 AUDIENCIA. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES (TESTIGOS, PERITOS, EL ESTADO ECUATORIANO)

El procedimiento que se sigue en el caso formulado ante la Corte, empieza en el momento en el que el representante de la Comisión el 15 de diciembre de 2010, presenta observaciones a la excepción preliminar exhibida por el Estado Ecuatoriano.

Mediante resolución de 23 de diciembre de 2010 el Presidente de la Corte, ordena recibir declaraciones rendidas por dos presuntas víctimas, declaraciones ordenadas de oficio por el Tribunal de la Corte y propuestos por el representante de las mismas. Tanto el representante de las presuntas víctimas como el representante del Estado Ecuatoriano, formularon preguntas sobre el caso, del mismo modo en que los peritos intervinieron con declaraciones, peritajes y observaciones a los testimonios de los representantes.

Posteriormente, el presidente de la Corte convoca a la Comisión y al Estado Ecuatoriano a la Audiencia Pública el 2 de marzo del 2011, con el fin de escuchar las declaraciones de las víctimas y los alegatos de los presuntos victimarios. Además con el objeto de analizar el caso, cita las observaciones finales de la Comisión Interamericana, las que tratan sobre la excepción preliminar y las complicaciones de fondo, reparaciones y costas del presente caso.

Por un lado, para el 4 de marzo del mismo año se reciben los alegatos finales escritos de las partes, por otro, la Comisión presenta sus observaciones finales escritas en referencia de los alegatos al caso; y a su vez, las partes realizaron las observaciones pertinentes necesarias sobre los nuevos documentos entregados por la Comisión y solicitados por la Corte, observaciones que fueron entregadas el 5 de mayo del mismo año.

2.2.1 Alegatos: Estado Ecuatoriano

El Estado Ecuatoriano, solicitó al Tribunal que rechace la demanda *in liminelitis*³⁵ fundamentándose en que los recursos de jurisdicción interna no habían sido agotados. Señaló que en el presente caso: *“el recurso adecuado y efectivo era iniciar una investigación por los hechos alegados por el representante de las presuntas víctimas y que supuestamente son violatorios de los derechos consagrados en la Convención”*³⁶.

Asimismo, alegó que *“nunca se determinó con precisión la figura penal que debía ser aplicada en el presente caso, en razón de la complejidad que conlleva el tema, por relacionarse con una muerte que se dio en el contexto de una intervención quirúrgica y la atención médica de varios facultativos, en procura de salvar la vida del señor Vera Vera”*.³⁷

³⁵ EXPRESIONES Y AFORISMOS JURÍDICOS LATINOS, Significado: In liminelitis.- Al comienzo del proceso, <http://bonfante.wordpress.com/2007/04/18/expresiones-y-aforismos-juridicos-latinos>.

³⁶ JURISPRUDENCIA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS, CASO VERA VERA, Resolución 0, Registro Oficial 530 de 08 de septiembre de 2011.

³⁷ Ídem.

Finalmente argumentó que:

*“El ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente a la fecha de los hechos, tenía un sistema procesal inquisitivo, en el cual llevar adelante el proceso era facultad del juez. Sin embargo, como posibilidad de saneamiento ante cualquier tipo de omisión y fundamentalmente desconocimiento de la perpetración de un delito por parte de las autoridades, se garantizó la facultad de que las personas pudieran poner en conocimiento del Estado las violaciones de las cuales hayan podido ser víctimas, con lo que alegadamente no se dejó de lado la obligación del Estado de poner en marcha una investigación de oficio”.*³⁸

2.2.2 Alegatos, Observaciones: La Comisión Interamericana.

Sin excluir lo antes anunciado entre las observaciones propuestas por la Comisión, ésta hace referencia a la extemporaneidad de los argumentos presentados por el Estado Ecuatoriano. La Comisión sostiene, que:

El Ecuador presenta cinco escritos, el primero y el segundo con fechas 27 de diciembre de 1995 y 11 de junio de 1996. Afirma que en estos escritos el Ecuador no expone su defensa en referencia con el agotamiento de los recursos internos, que posteriormente en los escritos presentados el 27 de septiembre de 1999 y el 2 de octubre de 2001, apenas se invoca expresamente el alegado incumplimiento del

³⁸JURISPRUDENCIA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS, CASO VERA VERA, Resolución 0, Registro Oficial 530 de 08 de septiembre de 2011.

*requisito de agotamiento de recursos internos amparándose en el artículo 46.1 de la Convención Interamericana.*³⁹

La Comisión resaltó, además, que los argumentos que sustentaron la excepción preliminar en el trámite de admisibilidad no coinciden con los formulados por el Estado en la contestación de la demanda ante la Corte. La Comisión señaló que “*ante ella el Estado alegó que existía un proceso aún no culminado que debía ser resuelto por los tribunales internos. A pesar de ello, el argumento central del Estado ante la Corte Interamericana es que no se dio inicio a la acción penal debido a que "no era presumible pensar en que podía haber habido una mala práctica médica"*.”⁴⁰

La Comisión indicó que por esta razón Ecuador argumentó que “*correspondía a los familiares de Pedro Miguel Vera Vera presentar una denuncia para activar la actuación del Estado*”. En virtud de las consideraciones anteriores, la Comisión solicitó a la Corte que declare la improcedencia de esta excepción preliminar en tanto se sustenta en argumentos extemporáneos no presentados oportunamente ante la Comisión.

2.2.3 Alegatos: Representante de Pedro Miguel Vera Vera.

Por su parte, el representante de la parte denunciante, señaló que “*el Código Procesal Penal vigente a la fecha de los hechos señalaba que la acción penal es pública y que se le ejercía de oficio*”. Por lo tanto, a la fecha de muerte de la presunta víctima, el juez de lo penal o los comisarios de policía tenían competencia para instruir el sumario de ley

³⁹Ídem.

⁴⁰Íbidem.

tendiente a investigar una infracción "pesquisable" de oficio, toda vez que tanto el Juez Décimo Primero Penal de Pichincha y el Comisario Quinto de Policía, quien realizó el levantamiento del cadáver en la ciudad de Quito, tuvieron conocimiento de los hechos.

En consecuencia, alegaron que *“ya no era necesario que se ejercitara la denuncia con la finalidad de poner en conocimiento del Estado el cometimiento de un delito penal perseguible de oficio, por cuanto los hechos ya eran de conocimiento de dichos funcionarios”*. Indicó que de conformidad con *“la legislación vigente en esa fecha el Comisario Quinto, tenía la obligación de instruir el sumario penal, no obstante, con las reformas introducidas en 1994 el proceso debió remitirse a un juez de lo penal para que continuara con el procedimiento, lo cual alegadamente demuestra que el proceso aún no termina, ya que los tribunales competentes deben proceder a resolverlo, sin que hasta la presente fecha el Estado Ecuatoriano haya dicho cuál fue el resultado de dicho proceso penal.”*⁴¹

Finalmente, el representante señaló *“que la familia de la víctima en forma oportuna sí puso en conocimiento del Estado que Pedro Miguel Vera Vera se encontraba herido por arma de fuego y que estaba detenido en un calabozo policial”*.⁴²

2.2.4 Intervención de las partes, testigos, peritos. Prueba Documental Testimonial y pericial.

La Corte recibió las declaraciones rendidas por los siguientes testigos y peritos.

⁴¹ JURISPRUDENCIA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS, CASO VERA VERA, Resolución 0, Registro Oficial 530 de 08 de septiembre de 2011.

⁴² Ídem.

- a) Agustín Abraham Vera Vera. hermano de Pedro Miguel Vera Vera. Se refirió a las afectaciones que sufrieron su hermano y su madre, su padrastro y sus hermanos a raíz de los hechos alegados en el presente caso.

- b) Francisco Ruben Vargas Benalcazar padrastro de Pedro Miguel Vera Vera. Se refirió a las diligencias que realizó ante funcionarios médicos y autoridades estatales a fin de que se brindara atención médica adecuada al señor Pedro Miguel Vera Vera.

- c) Hans Petter Hougen y Onder Oskalpci. Perito Doctor en Ciencias Médicas y Médico Forense, respectivamente. Peritaje conjunto dispuesto de Oficio por el Tribunal. Hace relación a la situación médica a la que estuvo dispuesto el señor Pedro Miguel Vera Vera y las consecuencias de la presunta falta de acceso a la atención médica debida durante los diez días transcurridos desde que recibió el impacto de bala hasta el momento de su fallecimiento. Observan que la necrosis intestinal en la autopsia indica que la cirugía no fue óptima, además que durante los diez días de detención debió hacerse la extracción de la bala que se encontraba incrustada en el cuerpo del hoy occiso.

- d) Manuel Ramiro Aguilar Torres, Perito Abogado. Peritaje dispuesto de oficio por el tribunal, se refirió al marco jurídico penal y procesal penal aplicable a los hechos del presente caso, incluyendo las posibilidades penales y administrativas, que podrían conducirse a fin de determinar las responsabilidades correspondientes.

- e) Aida Beatriz Villareal Tobar. Trabajadora Social. Se refirió a la práctica en las cárceles ecuatorianas, para evaluar el momento que se debe presentar a detenidos en los hospitales públicos cuando aquellos se encuentren enfermos o heridos.

- f) Al momento de la Audiencia la madre expresó: que compró algunos de los medicamentos suministrados a su hijo cuando se encontraba en el centro de Detención Provisional, además que el médico que lo atendía le había solicitado una gillette para la extracción de la bala que se encontraba en el cuerpo del señor Pedro Vera Vera.

- g) En su declaración jurada, el señor Francisco Rubén Vargas Benalcazar, quien declaró al Tribunal que el médico del centro de atención pidió a la señora Francisca Mercedes Vera que le proporcionara un bisturí y algunos medicamentos. La Corte consideró que efectivamente la madre del señor Pedro Vera Vera, proporcionó algunos medicamentos para la atención médica de su hijo.

- h) En su Peritaje, el señor Manuel Ramiro Aguilar Torres con base en el Art. 13 del Código Penal Ecuatoriano, vigente a esa época, señaló que la muerte del señor Pedro Vera Vera, debida ya sea por efectuar el disparo o por no atender adecuadamente al paciente, implicaría homicidio culposo, preterintencional o doloso, pero como el caso nunca fue judicializado, para determinar la entidad de los responsables, y la verdadera causa de su muerte, es imposible hacer un análisis de la forma cómo se habría aplicado, en concreto la ley penal ecuatoriana. Por ello la Corte estimó que se debió presentar una acusación particular; el parte policial informativo o la indagación policial; y, la orden superior de origen administrativo.

2.3 CONSIDERACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS

El tribunal de la Corte Interamericana señala que de acuerdo con el artículo 46 de la Convención Interamericana, para que una petición sea presentada conforme los artículos 44 y 45 del mismo instrumento, se requerirá: “*que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos*”. Sobre esa base, la Corte Interamericana evalúa, conforme a su jurisprudencia, si en el presente caso se verifican los presupuestos formales y materiales para que proceda una excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos.

En cuanto a los presupuestos formales:

“en el entendido de que esta excepción es una defensa disponible para el Estado, el Tribunal analizará en primer lugar las cuestiones propiamente procesales, tales como el momento procesal en que la excepción ha sido planteada (si fue alegada oportunamente); los hechos respecto de los cuales se planteó, y si la parte interesada ha señalado que la decisión de admisibilidad se basó en informaciones erróneas o en alguna afectación de su derecho de defensa”.⁴³

Respecto de los presupuestos materiales:

⁴³ JURISPRUDENCIA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS, CASO VERA VERA, Resolución 0, Registro Oficial 530 de 08 de septiembre de 2011.

“corresponde observar si se han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos, en particular, si el Estado que presenta esta excepción ha especificado los recursos internos que aún no se han agotado, y será preciso demostrar que estos recursos se encontraban disponibles y eran adecuados, idóneos y efectivos.”⁴⁴

Por tratarse de una cuestión de admisibilidad de una petición ante el Sistema Interamericano, deben verificarse los presupuestos de esa regla según sea alegado, si bien el análisis de los presupuestos formales prevalece sobre los de carácter material, en determinadas ocasiones, estos últimos pueden tener relación con el fondo del asunto.

Relacionado con lo anterior, constituye jurisprudencia reiterada de los casos de la Corte Interamericana, que una objeción al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la “supuesta falta de agotamiento de los recursos internos”, debe ser presentada en el momento procesal oportuno, esto es, en la etapa de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión. De lo contrario, el Estado Ecuatoriano habrá perdido la posibilidad de presentar esa defensa ante este Tribunal.

Asimismo, no corresponde a la Corte ni a la Comisión identificar ex officio cuáles son los recursos internos a agotar, sino que incumbe al Estado Ecuatoriano el señalamiento oportuno de los recursos internos que debieron agotarse y de su efectividad. Tampoco compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos de un Estado que, a pesar de que contó con la oportunidad procesal, no interpuso debidamente la excepción de agotamiento de recursos internos.

⁴⁴ Ídem.

De todo lo anteriormente narrado, se puede apreciar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un extensísimo análisis sobre los temas del debido proceso, agotamiento de los recursos internos y la prescripción en la legislación ecuatoriana, no obstante limitó su análisis a ciertas puntualizaciones.

El Ordenamiento Jurídico vigente a la fecha de la denuncia ante la justicia ecuatoriana, detalla lo que se establecía sobre el debido proceso y de acuerdo como lo establece el Código de Procedimiento Penal de la época, los principios del debido proceso decían: *“Ninguna persona puede ser penada por un delito sin que preceda el correspondiente procesamiento conforme a las disposiciones de este Código, ni juzgada por otros jueces que los establecidos por la Constitución y las leyes de la República”*.⁴⁵

El artículo 14 del Código de Procedimiento Penal a la fecha de la detención sobre la Acción Penal expresaba: *“La acción penal es de carácter público. En general se la ejercerá de oficio, pudiendo admitirse la acusación particular; pero en los casos señalados en el art. 428 de este Código, se la ejercerá únicamente mediante acusación particular”*.⁴⁶

Por su parte el artículo 428 del Código de Procedimiento Penal establecía:⁴⁷

“Mediante acusación particular, los jueces penales juzgarán únicamente los siguientes delitos:

⁴⁵ CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Decreto Legislativo 134, Registro Oficial 511 de 10 de junio de 1983. Arts 159,160.

⁴⁶ Ídem.

⁴⁷ Ídem.

- a) *El estupro perpetrado en una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho;*
- b) *El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiese consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor;*
- c) *La injuria calumniosa y la no calumniosa grave;*
- d) *Los daños causados en bosques, arboledas o huertos de propiedad particular, mediante el corte, descortezamiento o destrucción de árboles; los causados en un río, canal, arroyo, estanque, vivar o depósitos de agua, ya destruyendo los acueductos, diques, puentes o represas de propiedad particular, ya echando sustancias propias para destruir peces y otras especies ictiológicas, los causados con la muerte o heridas y lesiones a caballos y otros animales domésticos y domesticados; los causados mediante la destrucción de cercas o cerramientos de cualquier clase que fueren; la supresión o cambio de linderos, y cegamiento de fosos; y,*
- e) *Todos los demás delitos de usurpación no contemplados en el numeral anterior”.*

De los artículos anteriormente nombrados, se desprendería que el hecho perpetrado contra la persona del señor Pedro Miguel Vera Vera constituye una acción penal pública de acuerdo a la legislación de la época en que se dieron los hechos, y que por tanto se la debió seguir de oficio sin necesidad de que exista acusación particular sobre el hecho. En segundo lugar, era obligación del agente policial poner en conocimiento del agente fiscal los hechos para que este investigara el caso.

2.4 PRESCRIPCIÓN DEL CASO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA.

Dentro de la defensa del Estado Ecuatoriano en el caso que nos compete, se interpuso como primer argumento la prescripción de la acción a seguirse, ya que habían

transcurrido más de quince años desde que se admitió a trámite la demanda en la Comisión Interamericana, y más de ese mismo plazo desde que ocurrió la muerte del señor Pedro Miguel Vera Vera.

Con éste fundamento, el Estado Ecuatoriano pretendía quedar exento de realizar alguna investigación interna por esta causa. Sin embargo, entre las consideraciones presentadas por la Comisión Interamericana, constan aquellas que justifican una investigación debido a: la gravedad de las violaciones ocurridas en el caso, al involucramiento de diversas autoridades que impidieron determinar con certeza las responsabilidades en el mismo, al tiempo transcurrido por causas de negligencia de autoridades internas y a la necesidad de realizar un juicio que restablezca los derechos de la víctima y de sus familiares.

Ya en casos similares la Corte Interamericana sentó jurisprudencia con relación a la inadmisibilidad de alegaciones de prescripción en casos de derechos humanos, por lo que en éste caso se debió observar dicha jurisprudencia, para no incurrir en aquel error.⁴⁸

No obstante, existe la fundamentación de la Corte Interamericana acerca de la garantía de la prescripción de la acción presentada, en la que el mismo Tribunal determina las circunstancias de excepción y concluye con la improcedencia de dicha garantía, esto

⁴⁸ SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERMERICANA CASOS “Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil.”, “Gelman Vs Uruguay” dice: *“son inadmisibles las disposiciones de prescripción que pretendan impedir la investigación u sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”*.

principalmente por tratarse de un caso de *“tortura y asesinato cometida durante un contexto de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”*.⁴⁹

Es por ello que la Comisión Interamericana, entre sus recomendaciones solicitó a la Corte Interamericana que ordene al Estado ecuatoriano realizar la investigación judicial pertinente al caso, con el fin de identificar, de juzgar y sancionar a las personas responsables de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra el señor Pedro Miguel Vera Vera, sanciones que incluyan a las personas responsables de omitir los procesos y de esa manera negar sus derechos.

La misma Corte posteriormente ordena una investigación que permita a los familiares de Pedro Vera Vera y al público en general conocer lo que sucedió en este determinado caso con el objetivo de lograr una satisfacción en el mismo.

En conclusión sobre la aplicación de la figura de la prescripción penal en casos de Derechos Humanos, hay que tomar en cuenta el criterio emitido por el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que tratándose de violaciones tan claras a dichos derechos se hace sumamente necesario la investigación y conocimiento de los hechos. Dentro de este caso donde no se explica si se trató de un caso de mala práctica médica o de tortura por omisión de atención, se hacía necesario llegar hasta las últimas consecuencias, con el objetivo de, tal como se dijo en la sentencia, lograr una satisfacción por parte de los interesados en el caso principalmente de la madre de la víctima, quien tuvo que padecer junto a su hijo sus últimos días de vida.

⁴⁹ JURISPRUDENCIA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS, CASO VERA VERA, Resolución 0, Registro Oficial 530 de 08 de septiembre de 2011.

No se puede dejar de lado además el hecho de que en este caso existen graves vulneraciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva por parte de la Comisión Interamericana que en su momento sin justificar ni motivar de forma alguna dilata el proceso provocando así una demora que bien puede relacionarse con la prescripción de la acción.

2.5 SENTENCIA.

La Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, para examinar la alegada responsabilidad internacional del Estado Ecuatoriano por la presunta violación a los derechos a la integridad personal y a la vida, en relación con las obligaciones de respeto y garantía a cargo del señor Pedro Miguel Vera Vera, precisa:

*“en atención al acervo probatorio, las distintas etapas de la detención y la atención médica recibidos por aquel, por la variedad y complejidad de los hechos alegados en el presente caso, el Tribunal analizará los alegatos de las partes y determinará si dicha atención se brindó de forma inadecuada a la luz de los estándares derivados de la Convención, configurándose así posibles violaciones a los derechos a la integridad personal y a la vida del señor Pedro Miguel Vera Vera”.*⁵⁰

La violación de los artículos 5.1, 5.2 y 4.1 de la Convención Interamericana con respecto al artículo 1.1 de la misma, es observada en primera instancia por la Comisión Interamericana y posteriormente, el tribunal determina al respecto que el Estado

⁵⁰ JURISPRUDENCIA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS, CASO VERA VERA, Resolución 0, Registro Oficial 530 de 08 de septiembre de 2011.

Ecuatoriano “no brindó atención médica adecuada y oportuna al señor Pedro Miguel Vera Vera”, puesto que éste fue dado de alta luego de su primer internamiento en el Hospital de Santo Domingo de los Colorados sin que se hayan realizado los exámenes o diagnósticos pertinentes en atención a las lesiones que presentaba; de ello se desprende que cuando estaba detenido en el centro en el Centro de Detención Provisional de Santo Domingo, haya sufrido complicaciones sobre la misma lesión ocasionada por el impacto de bala, las que provocaron su muerte.

Para precisar la demanda la Corte Interamericana se fundamenta en la revisión de los siguientes puntos:

- La atención médica como parte del derecho a la vida e integridad personal de los detenidos y reclusos.
- Análisis de cada etapa de la atención médica recibida por el señor Vera Vera.
- Arresto del señor Vera Vera y traslado al cuartel de policía para registro.
- Primer internamiento en el Hospital Público de Santo Domingo de los Colorados.
- Atención en el Centro de Detención Provisional de Santo Domingo de los Colorados.
- Segundo internamiento en el Hospital Público de Santo Domingo de los Colorados, traslado al Hospital Eugenio Espejo de Quito y posterior fallecimiento del señor Vera Vera.

- Violación de los artículos 5.1, 5.2 y 4.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma.

- Supuesta situación carcelaria y de los servicios de salud de los privados de la libertad en el Ecuador en la época de los hechos.

El Tribunal de Corte Interamericana, para el caso busca relacionar los hechos presentados con los alegatos de las partes y la investigación realizada por la Comisión Interamericana en el mismo, puesto que al parecer resultan alejados de los acontecimientos los alegatos de acuerdo a lo descrito, por un lado lo que se trata de precautelar es el maltrato que recibió en este caso el señor Pedro Vera Vera y no de resolver sobre la legitimidad de la presentación extemporánea de la demanda. Sobre esta razón la consideración sería que el Estado Ecuatoriano dentro de sus alegatos debió haberse basado en la defensa de la atención brindada tanto en el Centro de Reclusión, como en los Centros Hospitalarios al señor Pedro Vera Vera, para con ello conseguir que la sentencia se enfoque en el tema de los Derechos Humanos.

2.6 DERECHOS VULNERADOS.

La Corte Interamericana sostiene que el *Derecho a la Vida* es fundamental en la Convención Interamericana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. A este respecto, los Estados parte tienen la obligación de garantizar la creación de condiciones que garanticen su goce y ejercicio. De la misma manera, existe el *Derecho a la Integridad personal*, que está ligado íntimamente con el derecho a la vida y a la salud física y psicológica de las personas.

La concepción del *Derecho a la Vida*, amerita otro tipo de análisis puntual, éste derecho es defendido por todos los Estados en sus Cartas Magnas, en el caso de Ecuador en la Constitución Política de la República vigente a la época de los hechos, en su artículo 19.1 lo planteaba como:

“Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza:

*1. La inviolabilidad de la vida y la integridad personal. No hay pena de muerte. Quedan prohibida la tortura y todo procedimiento inhumano o degradante”.*⁵¹

En comparación a la importancia que le dan las siguientes Constituciones del Estado al mismo derecho, es menester revisar los artículos sobre aquello, por ejemplo en la Constitución Política de la República del Ecuador, elaborada por el Asamblea Nacional Constituyente, el 10 de junio de 1998 y promulgada en el Registro Oficial de 11 de agosto de 1998, sobre la defensa del *Derecho a la Vida* de manera general en sus *artículos 16 y 17, Título III, de los Derechos Garantías y Deberes* expresa:

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los Derechos Humanos que garantiza esta Constitución.

El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos

⁵¹CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Cuarta de la Ley Reformatoria de la Constitución Política del Estado, promulgada en el Registro Oficial N.º 569 de 1.º de septiembre de 1983.

*internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos derechos”.*⁵²

La Asamblea Nacional Constituyente que reforma y crea la actual Constitución de la República del Ecuador, sobre los derechos humanos y más específicamente sobre el *Derecho a la Vida* y a la *Integridad Personal*, en su *Título II, artículo 11.3*, establece:

“Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

*Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley”.*⁵³

Como se puede observar el derecho a la vida y a la integridad personal, como preceptos se presentan en un contenido muy complejo y recogido de distintos modos dentro de la Constitución. Su reconocimiento no se encuentra expreso en ley alguna de forma primaria, ya que la vida se considera bien personalísimo e intransferible de ningún modo. Su sentido primordial de protección constitucional se plasma en el impedir que el Estado mate seres humanos, legalice la muerte o de algún modo la permita. El derecho a la vida

⁵²CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Registro Oficial No. 1, de 11 de agosto de 1998.

⁵³ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 499 de 20 de octubre de 2008, modificado el 13 de julio de 2011.

consagrado en las constituciones debería derivar para los Estados en dos clases de deberes:⁵⁴

- *El deber de respetar las vidas humanas; y,*

- *El deber de proteger las vidas humanas frente a los ataques homicidas procedentes de otros particulares.*

Sin embargo a ello el Estado no puede eliminar los riesgos para la vida derivados del mismo comportamiento social, de estos se deberá ocupar cada persona en cuidado de su bien personalísimo, evitando exponerse de manera que llegue de algún modo a deteriorar su salud y su misma vida.

Finalmente, sin que las concepciones anteriores sean necesariamente las concepciones que en la legislación ecuatoriana se hayan utilizado, llegan a tener una gran similitud.

La Constitución de la época en la que se desenvuelve el caso, ya protegía la vida y la integridad personal; derecho que se encontraba descrito y garantizado conforme a los convenios y tratados internacionales; por lo que, si de respeto a estos derechos se trataba, en el caso en mención se podría adelantar que se incumplieron o no se precautelaron dichos derechos.

⁵⁴COBO DEL ROSAL, Manuel y BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; "COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN PENAL", Editorial Revista de Derecho Privado, Pág. 63.

Por otro lado, con respecto al análisis de la atención médica recibida por el señor Vera Vera, la Corte recuerda que en numerosas decisiones los Organismos Internacionales se invocan las *Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos*, con el objeto de precautelar el derecho de las personas privadas de libertad. En cuanto a los servicios médicos que se les deben prestar, dichas reglas señalan en su numeral 24 que:

“El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.”⁵⁵

Como complemento a estos derechos, se puede argumentar a la libertad como un bien físico, moral y jurídico, este deriva directamente del principal bien de la persona que constituye el derecho a la vida.

La libertad se reconoce como otro de los principios programáticos en las principales leyes constitucionales y llega a adquirir el rango de derecho internacional según lo estipulado en el *artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre*⁵⁶.

⁵⁵**Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos** Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

⁵⁶ DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Convenio 0, Registro Auténtico 1948, de 10 de diciembre de 1948. **Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.**

¿Ahora, cómo se aplica el derecho a la libertad en concordancia con el derecho a no ser detenido? Esta interrogante es muy difícil de contestar, pues amerita todo un proceso probatorio de intermedio. Los casos de detención por parte de las autoridades o agentes policiales pueden tener variantes como:

“delito in fraganti intentado o consumado, detenido o preso que se fugare, procesado rebelde, procesado por delito que tenga pena superior a prisión menor, procesado por delito de pena inferior si se presume que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial y no presentarse en el acto de fianza bastante, y el sujeto de quien sin estar procesado, se estime que ha cometido un delito aunque sea de pena inferior a prisión menor, o se crea que tuvo participación en él, siempre que se presuma su no comparecencia cuando fuere llamado por el juez y no preste en el acto fianza bastante.”⁵⁷

Sobre estas bases, hay que tomar en cuenta el fundamento esencial de la detención, el cual no representa más que ejecutar la acción de la justicia, mediante la privación temporal de una persona, ésta debe ser siempre considerada como una medida excepcional, pues llega a ser inconciliable con la presunción de inocencia atribuida a toda persona. Este carácter de excepcionalidad debe perdurar en tanto subsistan los motivos que han ocasionado la sospecha de la comisión del delito.

Dentro del caso que nos compete, el señor Pedro Miguel Vera Vera cometió un *delito in fraganti*⁵⁸, es por esto que fue detenido por las autoridades y trasladado al centro de reclusión, siendo el perjuicio causado en su contra no la privación de su libertad si no el

⁵⁷ ONECA, J. Antón; “ESTUDIOS PENALES”, Ediciones Universidad de Salamanca, 1982. Pág. 906.

⁵⁸Df. En el acto de delinquir o apenas perpetrado el delito, Delito Flagrante: el descubierto en el momento mismo de su realización. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS”, Editorial HELIESTA.

hecho de que al momento de la detención fue herido por un arma de fuego y no se le brindó “a decir de los denunciantes” una debida atención médica oportuna y minuciosa, resultando de esta manera la privación de la libertad un agravante a su condición.

2.6.1 Fundamentos Jurídicos de la sentencia.

Sobre lo dispuesto según el art. 61 de la Convención Americana “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá así mismo, si ello fuera procedente, que se repare las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”, además la corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.

El tribunal estableció que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho.

El tribunal reitera que se considera como parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho consagrado en la misma. Las victimas en el caso son el señor Pedro Vera Vera y la señora Francisca Mercedes Vera Valdez, por lo que, pueden ser beneficiarios de las reparaciones que ordene la corte.

2.6.2 Análisis de la sentencia

Dentro del caso que se encuentra en análisis existen varias aristas que nos conducen a los argumentos jurídicos, éstos pudieron ser utilizadas respectivamente en la denuncia interna del Estado ecuatoriano y demanda del mismo.

En un inicio el representante de la parte demandante entre sus fundamentos jurídicos expuso la violación a los siguientes artículos de la Convención Interamericana, coincidiendo con lo alegado por la Comisión Interamericana y solicitó a la Corte declare la responsabilidad contra el Estado Ecuatoriano por la violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento. Los nombrados artículos hacían referencia al Derecho a la Vida, Derecho a la Integridad Personal, Garantías Judiciales y la Protección Judicial.

En la base de estos derechos se debió cimentar la demanda, fundamentando principalmente, la falta de atención médica adecuada y el sufrimiento físico y psíquico que derivaron en la muerte de Pedro Miguel Vera Vera, recalcando de igual modo que al momento de sucedidos los hechos el mencionado señor se encontraba bajo la custodia del Estado Ecuatoriano.

Entonces, a la falta de atención médica adecuada se deben revisar dos instancias, la primera si la atención médica simplemente no se recibió por negativa del Centro de

Reclusión y la segunda si existió *negligencia médica*⁵⁹ al momento de la atención a Pedro Vera Vera.

Se conoce que al momento de la detención de Pedro Vera Vera éste fue puesto en custodia de las autoridades penitenciarias del Centro de Detención de Santo Domingo, quienes en un lapso de no más de 30 minutos llevaron al detenido al Hospital Regional de Santo Domingo en donde recibió las primeras atenciones médicas.

Según lo descrito desde este momento se empieza a configurar la “negligencia”⁶⁰ puesto que los médicos de turno que recibieron al Señor Vera, evidenciaron que no contaban en ese momento con los equipos suficientes para realizarle los exámenes necesarios y determinar si se encontraba en condiciones de recibir el alta o no, y sin importar lo anterior decidieron que regresara a custodia del Centro de Detención, pues muy superficialmente no encontraron mayor gravedad en su condición.

No obstante, reconociendo los daños que por una herida de bala se puede ocasionar es oportuno indicar un poco de la materia de medicina legal, puesto que tratándose de una herida sufrida con un arma de fuego, la determinación del daño causado en la misma se deberá a varias condiciones: el tipo de arma que se pudo haber utilizado, pues de ello depende el tipo de herida causado, el trayecto de la bala dentro del organismo que

⁵⁹ La **negligencia médica** es un **acto** mal realizado por parte de un **proveedor de asistencia sanitaria** que se desvía de los estándares aceptados en la comunidad médica y que causa alguna **lesión al paciente**. Es haber realizado actos no apropiados o, por no haber tenido la diligencia requerida para el caso particular. Es decir, no haber cumplido con los parámetros mínimos y estándares de conducta para enfrentar el caso, y no haber cumplido con las normas técnicas de la profesión médica. <http://es.wikipedia.org>.

⁶⁰ Definición NEGLIGENCIA.- Descuido, falta de cuidado. <http://lema.rae.es/drae>.

determinará cuáles órganos fueron afectados y por último la distancia a la que fue efectuado el disparo lo que determinaría el daño provocado.⁶¹

Ahora bien estos elementos debieron tomarse en cuenta en el estudio realizado a Pedro Vera el momento de ingreso al Hospital como paciente, pues se conoce que los médicos determinaron que la herida de éste no parecía de gravedad y que por lo tanto según sus criterios médicos “*sanaría con el tiempo*”, es aquí que incurriría la *negligencia médica*, presentada ya sea por falta de equipo necesario, experiencia del personal o conocimientos, negligencia que generó un riesgo para la salud y la vida de la persona que se está tratando.

Hasta aquí ya se han configurado dos violaciones claras a la Vida y a la Integridad Personal, por lo que toca ver lo concerniente a las Garantías Judiciales y la Protección Judicial, puntos que se encuentran establecidos en la Constitución, los que serán interpretados y se aplicarán de acuerdo con el rango, materia, competencia o jurisdicción. En la Constitución de la República del Ecuador, para el caso que nos atañe se debieron aplicar las garantías explícitas en el artículo 86 y las acciones de protección y de hábeas corpus detalladas en los artículos 88 y 89 del mismo cuerpo legal.⁶²

Fundamentalmente, aplicable de forma directa al caso se encuentra en la Constitución de la República la acción de hábeas corpus, la que de acuerdo a su definición tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privada de ella de forma ilegítima con el propósito de salvaguardar su vida y/o su integridad física. Si se hace una relación con la normativa aplicable de la época en la que se suscitaron los hechos, la acción de habeas

⁶¹ ROJAS, Nerio; “MEDICINA LEGAL”, Librería y Editorial “EL ATENEIO”, Buenos Aires-Argentina, 1950. Pág. 92.

⁶² CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título III Garantías Constitucionales, Capítulo III, Sección segunda y tercera. Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 499 de 20 de octubre de 2008, modificado el 13 de julio de 2011.

corpus es medianamente similar al recurso de amparo judicial que se normalizó en el artículo 458 del Código de Procedimiento Penal vigente a partir de 1983, en el que se dispone la excarcelación inmediata del detenido en caso de que su prisión haya sido ilegal o de algún modo lo perjudique.

Sin embargo para la época de lo sucedido la protección judicial no se encontraba especificada en la Constitución Política de aquel entonces y los preceptos nombrados del Código de Procedimiento Penal, no le beneficiaban directamente al caso en mención. Los fundamentos jurídicos aplicables tenían que ser recogidos directamente de la Convención Interamericana y para que surtan validez, debían encontrarse en la misma escala jerárquica que la Constitución Política del Ecuador vigente a 1993.

2.7 EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.

La Sentencia de la CIDH se dictó con base de la muerte del señor Pedro Miguel Vera Vera, durante la tramitación del proceso penal que se inició con su detención en el cometimiento de delito flagrante, de asalto y robo.

La muerte del señor Pedro Miguel Vera Vera, ocurrió por la falta de atención médica a su estado de salud, deteriorado poco a poco, desde su detención, momento en el que fue impactado por una bala procedente de arma de fuego.

La justicia ecuatoriana siguió de oficio el delito de asalto y robo, causa de la detención del señor Pedro Vera Vera.

La CIDH declaró en su sentencia que el Estado Ecuatoriano no realizó acciones tendientes a esclarecer la muerte del señor Pedro Vera Vera, quien al momento de su detención, estaba bajo la custodia del Estado Ecuatoriano, además de que en la tramitación del proceso por el delito de asalto y robo, no se cumplieron las normas del debido proceso, que favorecen también al imputado o procesado, al no haber permitido que el señor Vera Vera sea atendido de la mejor manera en un centro de salud, atento el impacto de bala de que fuera objeto al momento de su detención.

En este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó la omisión⁶³ del estado ecuatoriano, que no permitió que al señor Pedro Vera Ve a se le brinde la debida atención médica, lo que causó el sufrimiento de la víctima y posteriormente desencadenó su muerte, sin que necesariamente se deba presumir, que existió esa intención; ésta omisión es una negligencia o falta de cuidado

2.8 PUNTOS RESOLUTIVOS.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos por unanimidad declaró, entre otros puntos, que la excepción preliminar presentada por el Estado debe ser desestimada.

Dentro de sus consideraciones, la Corte establece que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la vida establecidos en los artículos

⁶³ DELITOS DE OMISIÓN: artículo 12 del Código Penal, Registro Oficial Suplemento No 160 de 29 de marzo de 2010. Comisión por omisión.- No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo.

5.1⁶⁴, 5.2⁶⁵ y 4.1⁶⁶ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1⁶⁷ de la misma, en perjuicio del señor Pedro Miguel Vera Vera.

También determina que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial establecidos en los artículos 8.1⁶⁸ y 25.1⁶⁹ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Pedro Miguel Vera Vera y Francisca Mercedes Vera Valdez.

Se considera además que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Francisca Mercedes Vera Valdez.

⁶⁴ Art.-5.1. *Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.*

⁶⁵ Art.-5. 2. *Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.*

⁶⁶ Art.- 4.1. *Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.*

⁶⁷ Art. 1. *Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.*

⁶⁸ Art.8.1. *Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.*

⁶⁹ Art.25.1 *Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.*

Concomitantemente se considera que existe responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial establecidos en los artículos 8.1⁷⁰ y 25.1⁷¹ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de Pedro Miguel Vera Vera y Francisca Mercedes Vera Valdez,

2.9 MEDIDAS DE REPARACIÓN.

Dentro de las medidas de reparación, la Corte dispuso por unanimidad, que la sentencia constituye per se una forma de reparación, debiendo el Estado adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para que la madre de Pedro Miguel Vera Vera pueda conocer lo sucedido a su hijo.

También se dispone que el Estado realice las publicaciones de la sentencia y su difusión; y además pagará las cantidades fijadas en la Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y por reintegro de costas y gastos, según corresponda.

Para resolver, el Tribunal observó que el representante no aportó pruebas que permitan acreditar los montos señalados como salario mínimo vigente en el país al momento de los

⁷⁰ Art.- 8.1. *Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.*

⁷¹ Art.- 25.1 *Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.*

hechos o la expectativa de vida probable, de acuerdo a sus alegatos. No obstante, por las violaciones declaradas en esta Sentencia en perjuicio del señor Pedro Miguel Vera Vera, este Tribunal decide fijar en equidad la cantidad de US\$20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño material, la cual deberá ser entregada a la señora Francisca Mercedes Vera Valdez. Dicho monto deberá ser pagado en el plazo que la Corte fije para tal efecto.

Por otro lado, el Tribunal no contó con elementos probatorios que acrediten los montos que habría desembolsado la señora Francisca Mercedes Vera Valdez a fin de que su hijo recibiera atención médica en el Centro de Detención de Santo Domingo de los Colorados y en los dos hospitales en que fue atendido. No obstante, como se señaló en esta Sentencia, la Corte dio por probados tales hechos. El Tribunal también incluye en este apartado los gastos cancelados a un abogado por la señora Vera Valdez a fin de conseguir que su hijo fuera trasladado a un hospital para que le fuera extraída la bala. La Corte también toma en cuenta que a pregunta expresa formulada durante la audiencia pública, el representante manifestó que los familiares del señor Vera Vera no cuentan con comprobantes de gastos dado el transcurso del tiempo, lo cual el Tribunal acepta por considerarlo razonable dados los hechos establecidos en esta Sentencia. Por lo tanto, la Corte decide fijar en equidad la cantidad de US\$2,000.00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño material a favor de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez. Dicho monto deberá ser pagado en el plazo que la Corte fije para tal efecto.

Al respecto, este Tribunal observa que el señor Pedro Miguel Vera Vera recibió tratos inhumanos y degradantes mientras permaneció herido de bala bajo la custodia del Estado, hasta que finalmente falleció. En consideración del carácter de las violaciones cometidas, la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US\$10,000.00 (diez mil dólares de

los Estados Unidos de América) a su favor, la cual deberá ser entregada a la señora Francisca Mercedes Vera Valdez en el plazo que la Corte fije para tal efecto.

Asimismo, quedó ampliamente probado en esta Sentencia que la señora Francisca Mercedes Vera Valdez sufrió angustia y dolor a causa de la negligencia médica sufrida por su hijo mientras permaneció detenido con una herida de bala, por su muerte bajo custodia del Estado, y por la posterior denegación de justicia en relación con estos hechos.

Al respecto, el Tribunal también destaca que las acciones civiles, penales y administrativas se encuentran prescritas en el presente caso, habiendo sido la investigación de los hechos una obligación ex officio a cargo del Estado. En razón de lo anterior, el Tribunal estima pertinente fijar, en equidad, la suma de US\$20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez, como compensación por concepto de daño inmaterial, en el plazo que la Corte fije para tal efecto.

La Corte observa que el representante no presentó prueba alguna respecto a la tramitación del presente caso ante la Comisión Interamericana. Asimismo, que respecto de algunas de las pruebas de gastos realizados con ocasión de este proceso, el representante no especificó ni argumentó a qué tipo de gastos correspondían dichos comprobantes y su relación con este caso. Sin embargo, al respecto, también consta en el expediente que el representante presentó algunos comprobantes de gastos incurridos con ocasión de la audiencia pública celebrada en el presente caso, tales como traslado, hospedaje, visas, vacunación por la fiebre amarilla e impuestos de salida.

Con base en lo anterior, la Corte toma en cuenta los gastos ocasión de la audiencia pública celebrada en el presente caso, tales como traslado, hospedaje, visas, vacunación por la fiebre amarilla e impuestos de salida. El Tribunal también toma en cuenta que en este caso no ha habido una investigación de los hechos a nivel interno, y que los gastos de abogado realizados para lograr el traslado del señor Vera Vera del cuartel de policía a un hospital ya fueron contemplados al determinar el daño material a favor de la señora Vera Valdez comprobados por el representante relacionados con la audiencia pública celebrada en el presente caso.

Por otro lado, la Corte observa que el trámite de éste ante el sistema interamericano ha tomado dieciséis años y medio aproximadamente, durante los cuales, la Corte presume se ha incurrido en gastos de comunicación, transporte y suministros, entre otros. Por lo tanto, considera, en equidad, que el Estado debe pagar, por concepto de costas y gastos, la cantidad de US\$10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América). Esta cantidad deberá ser entregada directamente al representante. Igualmente, la Corte precisa que en el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la presente Sentencia, podrá disponer el reembolso a la víctima o su representante, por parte del Estado, de los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal.

El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial directamente a la señora Francisca Mercedes Vera Valdez, y el pago por concepto de costas y gastos directamente al representante, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.

Finalmente, en caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Ecuador.

Para los efectos prácticos, y de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma.

Así mismo, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

Con la sentencia de la CIDH, se condenó al Estado Ecuatoriano a satisfacer las siguientes medidas de reparación, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana la Corte Interamericana decidió que en toda violación de una obligación internacional que haya causado daños, existe la obligación de repararla adecuadamente.

Esta sentencia, se dictó el 19 de mayo de 2011, estando en vigencia la nueva Constitución 2008, los temas de reparación integral, son acordes a la legislación interna del Ecuador, artículo 78 que dispone:

Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no re victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación,

*garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.*⁷²

Al igual que en la Convención Interamericana, la Constitución del Ecuador garantiza la reparación de los daños y la indemnización por los perjuicios siempre y cuando se compruebe la verdad de los hechos y que se demuestre que se ha victimizado a un individuo.

En este caso, la CIDH realizó un análisis de los daños provocados en contra de Pedro Miguel Vera Vera, conforme a sus pretensiones y argumentos presentados.

En orden de importancia se ordenó al Estado ecuatoriano:

- a) Realizar una investigación judicial pronta, diligente y efectiva, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables, sin que de esto se obtenga un resultado específico.

Esta también fue una de las recomendaciones que la Comisión de la CIDH realizó al Estado Ecuatoriano, una vez que tuvo conocimiento de la demanda en su contra, y, por cuanto el Estado Ecuatoriano, no la cumplió, la Comisión Interamericana de Derechos

⁷² CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título II de los Derechos, Capítulo VIII, Derechos de Protección. Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 499 de 20 de octubre de 2008, modificado el 13 de julio de 2011.

Humanos el 6 de agosto de 2009 y seis meses después la puso a disposición de la Corte Interamericana, casi quince años más tarde.

Este transcurso de tiempo, permite decir con certeza, que si el Estado Ecuatoriano investiga, sus resultados serán casi nulos. Para el Estado Ecuatoriano, resulta casi imposible, por el tiempo transcurrido realizar investigaciones tendientes a cumplir éste requerimiento.

- b) Realizar las gestiones pertinentes para que la señora Mercedes Francisca Vera Valdez tenga satisfactorio conocimiento de lo sucedido con su hijo Pedro Miguel Vera Vera mientras se encontraba en la custodia del Estado ecuatoriano.

- c) Efectúe la publicación de determinadas partes de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional y un resumen oficial de la misma un diario diferente igualmente de circulación nacional. Así como la publicación integral de la sentencia en un sitio web oficial del Estado para que sea difundido entre las autoridades policiales, penitenciarias, personal médico a cargo de las personas privadas de la libertad y a todo interesado en el caso.

- d) El pago de una indemnización por daño material e inmaterial, con el debido reintegro de costas y gastos. La corte fija en equidad la cantidad de US\$. 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez, pertinentes a compensar la falta de actuación del Estado frente al caso de su hijo en compensación al daño material; y, la cantidad de US\$. 20.000,00 (veinte

mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez correspondientes a la indemnización por la angustia y dolor causados durante el tiempo que su hijo se encontraba detenido con la herida de bala, en compensación al daño inmaterial.

- e) Por último, tomar todas las medidas legales, administrativas y de cualquier índole para asegurar a las personas privadas de la libertad acceso oportuno a los servicios médicos de conformidad a su estado de salud.

2.10 CUMPLIMIENTO DEL ECUADOR DE LA SENTENCIA.

El 27 de febrero de 2012 la CIDH emitió una primera Resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia en el caso Pedro Vera Vera y otros vs. Ecuador y mediante la cual declaró que la República del Ecuador había dado cumplimiento total a las siguientes obligaciones:

- a) Publicar ciertos párrafos de la sentencia en el Diario Oficial, publicar el resumen oficial de la misma en un diario de amplia circulación nacional, y publicar íntegramente la sentencia en un sitio web oficial adecuado; y
- b) Pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y por reintegro de costas y gastos.

En la misma Resolución se indicó que todavía estaban pendientes de cumplimiento las siguientes obligaciones del Estado:

- a) Adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para que la madre de Pedro Miguel Vera Vera pueda conocer lo sucedido a su hijo; y

- b) Difundir la sentencia entre las autoridades policiales, penitenciarias y personal médico a cargo de las personas privadas de libertad.

Ecuador, a través del Ministerio de Justicia elaboró un tiraje de mil cartillas informativas gráficas que contenían, entre otros, los hechos del caso, las violaciones de derechos humanos declaradas en la sentencia y los estándares de protección a los derechos humanos que deben observar las autoridades policiales y penitenciarias, y el personal médico a cargo de las personas privadas de la libertad y que además el 26 de junio de 2012 se difundieron 496 cartillas y se realizó una breve exposición sobre la necesidad de que hechos similares no se repitan, dentro del Programa de Capacitación Integral continua a personal policial creado a finales del año 2009, con la temática teórica-práctica en Derechos Humanos, uso de la fuerza.

En cuanto a la difusión de la sentencia entre el personal penitenciario, el Estado informó que el Ministerio de Justicia elaboró un “Módulo de capacitación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, dirigidos al personal penitenciario (incluyendo al personal médico, psiquiátrico y psicológico)”, que fue distribuido al personal docente encargado del “proceso de formación inicial que contiene la selección y capacitación de aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia del Sistema de Rehabilitación Social

mediante conocimientos técnicos, científicos y metodológicos de seguridad en el ejercicio de los Derechos Humanos”.

Esta capacitación se realiza en cada curso de formación de guías penitenciarios, tiene una duración de 6 meses, y una de las materias que se dicta es precisamente el estudio del caso Vera Vera”

En conocimiento de estos hechos la CIDH emitió una segunda resolución de supervisión de cumplimiento, en la que declaraba que el Ecuador ya había cumplido su obligación de difundir la sentencia entre las autoridades policiales, penitenciarias, pero que estaba pendiente la obligación de difundir ésta misma información entre el personal médico a cargo de las personas privadas de libertad.

Finalmente, en relación a la difusión de la Sentencia entre el personal médico a cargo de personas privadas de libertad, el Estado señaló que una vez que se cuente con las cartillas informativas y que la Subsecretaría de Gestión de Atención a Personas Adultas y Adolescentes en conflicto con la ley haya remitido un listado con el número de médicos que prestan sus servicios en los Centros de Rehabilitación Social, el [Ministerio de Justicia] se encargará de realizar la difusión de las cartillas, por lo que la CIDH observó que el Estado había dado cumplimiento parcial a la Sentencia en este punto de la Sentencia.

Otro punto que no se cumplió totalmente tiene relación con la investigación judicial pronta, diligente y efectiva, que debía realizar el Ecuador, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables, sin que de esto se obtenga un resultado específico y realizar las gestiones pertinentes para que la señora Mercedes Francisca Vera Valdez tenga

satisfactorio conocimiento de lo sucedido con su hijo Pedro Miguel Vera Vera mientras se encontraba en la custodia del Estado ecuatoriano.

De ésta obligación no existe ninguna investigación, al contrario se tiene muy poca información y no se encuentra responsabilidad de ningún tipo en los criterios médicos emitidos en el momento del alta del Hospital. También existen fallas por parte de los familiares de hoy occiso Pedro Vera Vera, pues por su tampoco se exigieron investigaciones al centro hospitalario por la supuesta “mala atención” brindada a Pedro Vera Vera.

CAPITULO III CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS

3.1 FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA Y OPORTUNA.

Este es un tema que anteriormente era tratado por los códigos de ética profesional que criminalizaban la mala práctica médica, pero actualmente con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal se tipificó, en su artículo 146⁷³, el: “*homicidio culposo por mala práctica profesional*”. No obstante, la figura del homicidio preterintencional podía en muchos casos ser aplicada para la determinación de responsabilidades penales relacionadas con este tipo de infracciones.

⁷³ **Art. 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.-** La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la ley.

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente:

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado.
2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o *lex artis* aplicables a la profesión.
3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas.
4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho.

Concordancias: ConsE [54](#); LODcon [27](#)

RESOLUCIÓN: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

Resuelve: Art. 1.- *El Código Orgánico Integral Penal, que en su artículo 146, establece los tipos penales simple y calificado de [homicidio culposo](#) por mala práctica profesional, debe ser comprendido en su integridad.*

Art. 2.- *Se entenderá que el homicidio culposo simple por mala práctica profesional, tipificado en el inciso primero del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, se configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado, conforme a su inciso final.*

Art. 3.- *Se entenderá que el homicidio culposo calificado por mala práctica profesional, tipificado en el inciso tercero del artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal, se configura por la inobservancia del deber objetivo de cuidado; y, además, por la concurrencia de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.*

(Rs. 01-2014: 24-abr-2014. RO-S 246: 15-may-2014)

En el caso analizado, es indiscutible la vinculación que existe entre la vulneración de los derechos humanos por la atención médica deficiente que recibió Pedro Vera Vera al encontrarse detenido, tomando en cuenta que los derechos a proteger fueron la vida y la salud por lo que se hacía necesario establecer mecanismos de protección para las víctimas de un error médico.

En la línea de dicho análisis se debe tomar en cuenta la acción u omisión de la atención médica adecuada y oportuna, pues es necesario preguntarse hasta donde llega la responsabilidad de un Estado en los casos de Derechos Humanos, de acuerdo con las sentencias emitidas por la misma Corte Interamericana en torno a esta materia.

Sobre esta base es pertinente citar lo expresado por *Aguilar* en su publicación *Derechos Humanos y responsabilidad internacional del Estado*, en la que se expone que el Estado es responsable por acciones u omisiones de carácter constituyente, legislativo o jurisdiccional; de manera que, la actividad legislativa o normativa puede comprometer seriamente la actividad del Estado en supuestos como: *a) la promulgación de una ley contraria a las obligaciones internacionales; b) la no promulgación de una ley indispensable para el cumplimiento de una obligación internacional preexistente; c) la no abrogación de una ley cuya vigencia impida la ejecución de sus obligaciones internacionales.*⁷⁴

Cabe destacar que, en el sentido estricto, la obligación de garantizar una atención médica adecuada y oportuna recae sobre el mismo Estado, esto se explica con una distinción del sentido amplio de los derechos humanos y el sentido estricto de los mismos, pues según lo señala *Casal* en su publicación *“Los Derechos Humanos y su protección”* los derechos humanos en sentido amplio son: *“derechos inherentes a la persona que se derivan de la dignidad humana y resultan fundamentales en un determinado estadio de*

⁷⁴ RAZÓN Y PALABRA; Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación; “Comunicación y Derechos Humanos”, número 81, noviembre de 2012 – enero de 2013, www.razonypalabra.org.mx.

*evolución de la humanidad, por lo que reclaman una protección jurídica”, y en sentido estricto son: “esos mismos derechos pero en la medida en que son reconocidos y protegidos en el ámbito internacional”.*⁷⁵

En tal sentido, es el Estado el ente llamado a incorporar jurídicamente la protección de los derechos humanos y su cumplimiento en la legislación, lo que lleva a la necesidad de la inclusión de normas que garanticen la protección a la salud y la vida mediante una adecuada y oportuna atención médica.

En el caso concreto, la atención médica es deficiente, y desencadena en el padecimiento y muerte de Pedro Vera Vera. La responsabilidad recae sobre el Estado Ecuatoriano al no existir una investigación que determine a los responsables directos e indirectos de la salud y vida de Pedro Vera Vera al encontrarse detenido. Hubiera sido indispensable para el esclarecimiento del caso que se realice una investigación sobre lo acontecido y se determine los responsables y los grados de responsabilidad, lamentablemente, al no seguirse ninguna acción el delito cometido quedó impune.

3.2. FALTA DE INVESTIGACIÓN EN ECUADOR DE LAS CAUSAS DE SU MUERTE.

Para comenzar una investigación sobre un delito es necesario remitirse al debido proceso en lo que al ámbito penal se refiere. En la época en la que se suscitaron los hechos, dentro de las garantías constitucionales, ya se hacía referencia a las Convenciones sobre Derechos Humanos, tema que ya ha sido tratado en párrafos anteriores.

⁷⁵ídem.

Revisando lo sucedido, al momento del primer ingreso de Pedro Vera Vera, al Hospital Regional de Santo Domingo, la atención que recibió fue escueta, casi nula, sin que de ella se desprenda ninguna prueba o resultado que demostrara que el disparo que recibió era grave y le provocaría la muerte. Para entender un poco más se ha de citar al profesor *Nerio Rojas* quien sobre la importancia del trayecto de una bala expresa:

*“El estudio del trayecto es útil para determinar la dirección del disparo y por consiguiente la posición del agresor con relación a su víctima. Las marcas de pólvora en la primera parte del trayecto tienen valor para determinar el orificio de entrada. A falta de otros datos, por la putrefacción, por ejemplo, la dirección del arrastre de esquirlas óseas indica la marcha del proyectil.”*⁷⁶

Este estudio sobre el trayecto del proyectil resultaba útil para determinar el lugar y la distancia desde la que se efectuó el disparo que recibió Pedro Vera Vera, lo que pudo ayudar a identificar también al posible agresor.

Posteriormente y como un estudio básico de su condición, era necesario la examinación mediante una radiografía, muestras de laboratorio, análisis clínico y la atención de un especialista; pero “probablemente por tratarse de un presunto delincuente”, todas estas atenciones pasaron por alto y los médicos del momento decidieron darle mayor importancia a otros casos por lo tanto, otorgaron el alta a Pedro Vera Vera.

De este incidente no se demuestra ninguna investigación, al contrario se tiene muy poca información y no se encuentra responsabilidad de ningún tipo en los criterios médicos

⁷⁶ ROJAS, Nerio; “MEDICINA LEGAL”, Librería y Editorial “El Ateneo”, Buenos Aires, 1950. Pág. 91.

emitidos en el momento del alta del Hospital. También existen fallas por parte de los familiares de hoy occiso Pedro Vera Vera, pues tampoco se exigieron investigaciones al centro hospitalario por la supuesta “mala atención” brindada a Pedro Vera Vera.

Muchas de las investigaciones no se realizan de oficio debido a la cantidad de casos que se presentan a diario, y la parte interesada no las impulsa por lo que la causa es desechada. Generalmente, los interesados en los casos intentan poner las denuncias respectivas para obtener la resolución por parte de la justicia, sin embargo la realidad del país, mucho más en la época en la que se dieron los hechos del caso que atañe, tiende a frustrar las investigaciones sin lograr resultados esperados.

3.3. FALTA DE ESCLARECIMIENTO DE LOS RESPONSABLES POR EL FALLECIMIENTO DE PEDRO VERA VERA.

Para determinar los responsables en este caso se debería indagar las investigaciones realizadas por la justicia ecuatoriana, tomando en cuenta que el caso llegó a una instancia de Corte Internacional y no logró el esclarecimiento de los responsables en el mismo. La Corte en su debido momento expresó que en razón del derecho de la madre y de los familiares de conocer lo sucedido al señor Vera Vera, el Estado Ecuatoriano debe adoptar las medidas necesarias y ordena una investigación que ayude a conocer lo que sucedió con el señor Pedro Miguel Vera Vera con el objeto de determinar responsabilidades, ya sea de mala práctica médica o de tortura en prisión por omisión de atención médica.

Es menester que paso a paso se desarrolle este tema y se analice cada una de las intervenciones por parte de la Policía, del Centro de Rehabilitación Social, del Centro Médico y otros, para llegar a la conclusión del mismo. Como ya se ha establecido anteriormente, el Estado es responsable por acciones u omisiones de carácter constituyente,

legislativo o jurisdiccional, partiendo de supuestos como: a) la promulgación de una ley contraria a las obligaciones internacionales; b) la promulgación de una ley indispensable para el cumplimiento de una obligación internacional preexistente; c) la no abrogación de una ley cuya vigencia impida la ejecución de sus obligaciones internacionales.⁷⁷ Por lo que, la responsabilidad de los hechos del caso recaería directamente en los actores involucrados que se mencionan al inicio del párrafo.

Para concretar el estudio, se puede llegar a la conclusión, que el trato indebido de la Policía, la mala atención e insalubridad en el centro de rehabilitación y la mala práctica de los médicos tratantes produjo como resultado final la muerte del señor Pedro Vera Vera.

3.3.1. Intervención de la Policía en la Detención.

Dentro del caso en análisis, la Policía tuvo la oportunidad de capturar a Pedro Miguel Vera Vera en el cometimiento de delito *in fraganti*⁷⁸. En innumerables casos la Policía tiene la oportunidad de capturar a personas en pleno cometimiento de un delito, según el Código de Procedimiento Penal en su artículo 162, el cual desarrolla el concepto del delito flagrante como “*aquel que se comete en presencia de una o más personas, o cuando se lo descubre inmediatamente*”. El hecho motivo del análisis se enmarca en esta norma.

La corte confirmó que se produjo la captura por parte de miembros de la Policía Nacional, según consta en la sentencias de la Corte Interamericana en el punto B.2.1 donde dice: “Pedro Miguel Vera Vera, de 20 años de edad, fue detenido el 12 de abril de 1993, aproximadamente a las 20:00 horas, por miembros de la policía nacional que prestaban

⁷⁷ Aguiar, A; “*Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado*”; Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana. Publicaciones UCAB. 1997.

⁷⁸ EXPRESIONES Y AFORISMOS JURÍDICOS LATINOS, Significado: IN FRAGANTI DELICTO: “En el momento de cometer un delito”. Vulgarmente suele escribirse IN FRAGANTI, pero en tal caso ya no constituye forma latina propiamente dicha. Fuente: *Diccionario de expresiones y frases latinas / Victor-José Herrero Llorente*. <http://bib.us.es>

servicio en distintas localidades del cantón Santo Domingo de los Colorados (actual provincia de Santo Domingo de los Sachilas), luego de que fue perseguido por un grupo de personas quienes aparentemente lo acusaban de haber cometido **asalto y robo a mano armada** y escucharse un disparo de arma de fuego. Al detenerlo, los policías notaron que presentaba una herida de bala a la altura del pecho en el costado izquierdo y lo trasladaron en taxi al cuartel de la policía. Posteriormente fue trasladado al hospital público de Santo Domingo de los Colorados, donde ingresó a la sala de emergencia a las 20:20 y fue atendido por los médicos de turno”

En resumen, los policías que lo detuvieron lo llevaron hasta el cuartel de la Policía para registrarlo y posteriormente trasladarle al Hospital Regional de Santo Domingo, en el lugar no se realizó el diagnóstico pertinente para saber si requería de una cirugía, por lo que le dan el alta, al día siguiente es llevado al Centro de Detención Provisional. De acuerdo a la Sentencia de la Corte, es aquí donde se configura la negligencia por parte de la Policía, pues se falta a todo procedimiento en defensa de los derechos de los detenidos.

Dentro de las excepciones preliminares, el Ecuador aduce como defensa la falta de agotamiento de recursos de la jurisdicción interna, sosteniendo que los familiares de la víctima no iniciaron ninguna acción para investigar los hechos, hasta que ello no sucediera, las instancias nacionales debieron agotarse. Así mismo, cuando se trata de la investigación de la muerte de una persona las autoridades encargadas deben iniciar ex officio y sin dilación (como no sucedió en el caso) una investigación seria, imparcial y efectiva. Cabe recalcar que el deber de investigar es de medios y no de resultados, por lo que, sin importar el resultado a obtener, se debía comenzar con la investigación.

3.3.2. Intervención del Centro de Rehabilitación Social.

En referencia a la intervención del Centro de Rehabilitación Social, la sentencia del caso que Pedro Miguel Vera Vera determina que el mismo rindió declaración ante el Fiscal

Décimo Penal de Pichincha, y el jefe de la Oficina de Investigación del Delito de Santo Domingo de los Colorados, al siguiente día de su detención el 13 de abril de 1993. El mismo día fue atendido por el médico de la Unidad Policial⁷⁹, quien en su examen determina que el detenido presentaba una “*herida por proyectil de arma de fuego*” aparentemente sin complicaciones y realizada antes de su detención, posteriormente realizó un diagnóstico “*determinando que la herida no es de gravedad*”.

Al contrario de lo concluido por el médico de la Unidad Policial, la madre de Pedro Vera, al ver el padecimiento sufrido y trato recibido por su hijo en el Centro de Detención Provisional decide intervenir, solicitando a los encargados del Centro de Detención Provisional permiso para adquirir una “gillette” y analgésicos, para de este modo extraer la bala del cuerpo de su hijo y calmar en algo el dolor que el padecía.

El trato que Pedro Vera Vera recibe por parte del Centro de Rehabilitación Social en sí constituye una violación a los derechos básicos de las personas privadas de la libertad, contraviene los principios de la dirección nacional de Rehabilitación Social⁸⁰ y configura una violación a los Derechos Humanos.

⁷⁹ Certificado emitido por el doctor Luis Fernando Lara Yáñez, de 14 de abril de 1993 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 3, folio 545). Cit. Sentencia caso Vera Vera vs Ecuador, 19 de mayo de 2011.

⁸⁰ REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL DIRECCION DE REHABILITACION SOCIAL DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS Art. 1.- *La Dirección Nacional de Rehabilitación Social tiene como finalidad básica la ejecución de las Penas Privativas y restrictivas de la libertad, impuestas de conformidad con el Código Penal; el Código de Procedimiento Penal y demás Leyes especiales y conexas, así como también el tratamiento y rehabilitación integral de los internos y su control post - carcelario.*

Art. 2.- *Son objetivos principales de la Institución: a) El tratamiento y rehabilitación de los internos que se encuentran reclusos en los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador, para reintegrarlos a la sociedad como elementos positivos de ella. b) Impulsar, desarrollar y ejecutar Proyectos y Programas de Rehabilitación en favor de los internos. c) La administración eficiente de los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador.*

3.4. SUFRIMIENTO QUE PADECIÓ LA SEÑORA FRANCISCA MERCEDES VERA VALDEZ POR EL TRATO DISPENSADO A SU HIJO, EL SEÑOR VERA VERA.

La señora Francisca Mercedes Vera Valdez, madre de Pedro Vera Vera, tal como se explica en el punto anterior, es testigo de los malos tratos y sufrimiento conferidos a su hijo durante el tiempo que se encontraba detenido en el Centro de Detención Provisional, a instancia del médico que lo atendía; tal como se detalló compró “un bisturí y unas pastillas analgésicas” para que se le extrajera la bala a su hijo y declaró que encontró a su hijo en tirado en el suelo de la celda con el piso mojado, pálido del color de un papel de despacho, suplicante por el dolor que sentía y que le rogaba “madre sácame no aguanto más”.

Debido a estas circunstancias, la Señora Francisca Vera Valdez, consigue un abogado quien le ayuda presentando un escrito al juez, a fin de que se traslade a su hijo al hospital, también solicitó al Comisario Nacional de Policía de Santo Domingo de los Colorados efectúe el reconocimiento médico legal, con el objeto de constatar el verdadero estado de su hijo y que se le pueda trasladar a una clínica para su atención inmediata.

De ello se desprende la designación de dos peritos médicos el 14 de abril de 1993 dos días después de la detención, para que realizaran el análisis de su hijo obteniendo como resultado un informe en el que se recomienda sacar una radiografía para descartar lesiones definitivas, la extracción del proyectil del arma de fuego y quince días de reposo por incapacidad siempre y cuando no existan complicaciones.

Al no obtener resultados favorables la señora madre de Pedro Vera Vera, solicita la presentación de un nuevo escrito el 16 de abril de 1993, donde conste la solicitud al Juez

Décimo Primero de lo Penal de Pichincha, a fin de que éste ordenara el traslado de su hijo desde los calabozos de la Policía hasta una clínica; y, como resultado se ordena el traslado al Hospital Regional para ser intervenido quirúrgicamente, sin embargo el médico de la unidad policial había manifestado que “no justifica el traslado del detenido al hospital” dentro de un informe donde refirió:

“El detenido había sufrido una herida por proyectil de arma de fuego, que luego de ingresar por tórax anterior, se desvió hacia la fosa renal sin causar complicaciones. El detenido había recibido atención emergente en el hospital de la localidad y por no haber complicaciones fue remitido a esa unidad; fue su criterio que ese proyectil deberá quedarse donde se encontraba, ya que a su alrededor se produjo un callo y como no habían complicaciones, no se justificaba la intervención quirúrgica”⁸¹.

El 17 de abril de 1993, se presentan las primeras complicaciones y de acuerdo a lo declarado por la señora Vera Valdez al llegar al hospital, su hijo no fue intervenido quirúrgicamente puesto que no existían los medios necesarios para llevar a cabo esto y el médico que podría atender su caso llegaría hasta el día lunes. Desesperada busco la ayuda del policía encargado para lograr trasladar a su hijo al hospital Eugenio Espejo de Quito, sin embargo este supo decirle que no le han dado la orden para poder llevarlo, y no logro trasladarlo a dicha casa asistencial.

El día 22 de abril, cuando ya el estado de salud de Pedro Vera Vera se encontraba sumamente deteriorado, se permite su traslado al Hospital Eugenio Espejo de Quito, donde ingresa a las 14:45 horas, una vez ahí se le practica una “laparoscopia exploratoria”

⁸¹ Párrafo de la Revista “RAZÓN Y PALABRA”, Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. www.razonypalabra.org.mx

emergente realizada aproximadamente a las 21:00 horas, a las 01:45 del 23 de abril diagnostican en una operación emergente que presenta líquido purulento libre en la cavidad torácica de más o menos 2000 cc, abscesos múltiples, en espacios subfrénico derecho, corredera parieto cólica y fosa esplénica, una perforación de más o menos 4 cm diámetro en borde antimesentérico, con escape de contenido intestinal, una importante zona de emplazamiento que interesa espilón mayor, estómago, bazo, colon traverso y descendente en asas intestinales delgadas y gruesas, necrosis marcada de colon traverso y descendente en zona adyacente a perforación.

Por esta razón Francisca Mercedes y su esposo, se ven obligados a conseguir un préstamo para cubrir los gastos de traslado e intervenciones que le efectuaron a Pedro Vera Vera en Quito, declarando que por falta de dinero consiguieron solamente 2 de las 4 pintas de sangre necesarias para la intervención. A pesar de todo lo actuado por parte de su madre, el señor Pedro Vera Vera fallece horas después de la intervención quirúrgica por causas determinadas como: “peritonitis y hemoperitoneo por laceraciones de vasos mesentérico y asas intestinales, consecutivos a la penetración de proyectil de arma de fuego”.

La madre del fallecido Pedro Vera Vera, intentó salvar la vida de su hijo, sin lograr que se le dé la atención debida, ni por parte de los oficiales policiales a cargo del caso, ni por parte de los encargados del Centro de Rehabilitación, y con poca importancia de parte de los médicos, por lo que sufrió un daño emocional, psicológico y aparentemente físico debido a su estado de ánimo, adicionalmente los perjuicios económicos por las obligaciones contraídas y con la urgencia que las tuvo que realizar también aportaron a que su bienestar sea gravemente afectado.

CONCLUSIONES

POSICIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO POSTERIOR A LA SENTENCIA

El Estado ecuatoriano, en a este caso se presentó en una posición débil frente a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana; su actuación no fue la adecuada, pues si bien es cierto, este caso es una clara violación a los derechos humanos, el Estado ecuatoriano pudo evitar que la resolución se tan drástica, mediante la utilización de mecanismos internos adecuados desde el inicio de los hechos o pudo lograr una sentencia a su favor mediante la correcta argumentación de su defensa.

El Estado ecuatoriano se encontraba restringido por los lineamientos de su Carta Constitucional, al sometimiento, cuando de derechos humanos se trata, a los Tratados, Convenios, Pactos y Convenciones Internacionales, tal como se encuentra expresado en su título VIII, capítulo primero de los principios de las relaciones internacionales, artículo 417⁸². Es por esto que su posición al momento de la demanda era de sometimiento a lo establecido por la Convención Interamericana.

⁸² CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título VIII, Capítulo I, Relaciones Internacionales. Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 499 de 20 de octubre de 2008, modificado el 13 de julio de 2011. Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

En este sentido la Resolución 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (28 de enero 2002), en su capítulo II, artículo 4⁸³, expresa que es competencia del Estado el comportamiento de todo órgano que ejerza funciones legislativas o de cualquier índole. Por lo tanto, se considerará que la falta de una legislación que garantice y proteja el derecho a la vida o que norme el derecho a la salud incluyendo legislación acerca de la mala práctica médica, será una omisión legislativa que se puede presentar ya sea por incumplimiento del legislador o como una irresponsabilidad del Estado.

Por esta misma razón se considera también como una irresponsabilidad el cometimiento de hechos ilícitos por parte del Estado lo que se establece en el artículo 5⁸⁴ de la referida resolución sobre el comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones de poder público, o un profesional médico de un Centro de Salud pública habiendo incurrido en negligencia, causando daños a las personas, familiares y a su patrimonio.

De los artículos anteriormente expuestos se deduce que las leyes aplicables tenían una serie de incongruencias y vacíos que se debían derogar otras incluir y otras reformar, que pudiesen haber mejorado la utilización del sistema judicial del país. Tal es el caso del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social expedido en el año 2006, donde se especifica el trato que se les proporcionará a las personas privadas de libertad, en relación con la Constitución de la República, el Código Penal del Ecuador y el Código de Procedimiento Penal del Ecuador.

⁸³ RESOLUCIÓN 56/83 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Artículo 4: Comportamiento de los órganos del Estado.

⁸⁴ Ídem, artículo 5: Comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público.

Lo deseable en el Ecuador sería contar con un Sistema Penitenciario y unas Garantías Constitucionales totalmente compatibles entre sí y aplicables, para que la normativa se refleje al momento de la práctica. Es tan frágil la línea que divide al actuar del deber actuar que, al momento de administrar justicia nos encontramos con un sistema repleto de artimañas que lo sobrepasan, por lo que resulta igual de difícil al ciudadano común probar sus derechos frente al Estado, que al mismo Estado probar sus derechos frente a una acusación de violación civil.

La posición adoptada por el Estado ecuatoriano frente a la demanda presentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responde a la carencia de recursos con los que cuenta el sistema judicial en el Ecuador. Claramente se demuestra la débil actuación que los representantes del Estado mantienen durante el proceso frente a la Corte Interamericana, pues a pesar de todo lo argumentado en este caso, la posición de la defensa no es la correcta.

Para obtener una resolución favorable del caso, el Estado pudo haber probado adecuadamente sus argumentos con la finalidad de que los resultados demuestren que no tuvo responsabilidad con el maltrato físico, psicológico, que desencadenó en la muerte del señor Pedro Vera Vera, pues se cumplió con todo lo establecido dentro de la relación jurídica procesal y se tomó las medidas necesarias para salvaguardar la salud física y mental del señor Vera.

Sin tratar de dilatar el proceso, el Estado ecuatoriano debió presentar pruebas necesarias para comprobar la atención médica oportuna recibida por parte del interno Pedro Vera Vera, demostrar además que los tratos que se le brindó tanto en los Hospitales como en el Centro Penitenciario fueron los adecuados, presentar documentos que demuestren que el

hoy occiso Pedro Vera Vera, murió en el Hospital debido a una complicación médica, por último indicar que frente al Estado ecuatoriano no se presentó ninguna denuncia de maltrato físico, psicológico ni de mala práctica médica ni de falta de atención adecuada durante o después de la detención y fallecimiento del señor Pedro Vera Vera.

No obstante, el Estado y sus representantes presentan frente a la Corte argumentos dilatorios del proceso e intentan probar que la causa por la que se le persigue se encuentra prescrita, sin tomar en cuenta que en casos de violación a derechos humanos la figura de la prescripción no aplica⁸⁵. Posterior a ello se enfocan en el caso en sí argumentando la debida

⁸⁵ La Corte ya ha señalado que la prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo y que, generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores. Como señaló la Comisión, el Tribunal precisó en la Sentencia dictada en el caso Albán Cornejo Vs. Ecuador el criterio consistente en que “[s]in perjuicio de lo anterior, la prescripción de la acción penal es inadmisibles e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional. La jurisprudencia constante y uniforme de la Corte así lo ha señalado”. Por lo tanto, la improcedencia de la prescripción no fue declarada en dicho caso por no tratarse de una violación grave a los derechos humanos, conforme al criterio de la Corte ya señalado. De manera más reciente, en la Sentencia dictada por el Tribunal en el caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, se reiteró dicho criterio al establecer que “en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisibles e inaplicable la prescripción[,] así como las disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas”. Este criterio, particularmente, la improcedencia de la prescripción, fue aplicado al caso mencionado al tratarse de “la tortura o el asesinato cometidas durante un contexto de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos”. Ahora bien, aunque no se trató de un caso en el cual se haya alegado la prescripción penal, en la Sentencia emitida también recientemente en el caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido de que ‘son inadmisibles las [...] disposiciones de prescripción [...] que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos’”. Esta jurisprudencia también fue sostenida en el último caso en conocimiento de la Corte a la fecha en el cual se alegaron violaciones graves a derechos humanos, es decir, en Gelman Vs. Uruguay. De lo anterior se desprende que, en la jurisprudencia de la Corte, la improcedencia de la prescripción usualmente ha sido declarada por las peculiaridades en casos que involucran graves violaciones a derechos humanos, tales como la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial y tortura. En algunos de esos casos, las violaciones de derechos humanos ocurrieron en contextos de violaciones masivas y sistemáticas.

atención médica y el adecuado trato penitenciario alegando no tener responsabilidad de violación de derechos humanos argumento que debió haberse presentado como primera opción en su defensa.

Por otro lado la posición del representante de la parte demandante, también se presenta tenue, busca defender el caso alegando el sufrimiento extremo que tuvo la víctima con la violación a los artículos de la Convención invocados sobre el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y procesales, dejando de lado el perjuicio que se le ocasiona a la señora Francisca Mercedes Vera Valdez, quien padece aún más por los maltratos inferidos a su hijo y la falta de audiencia de sus peticiones y a quien el Estado debió restituir por los perjuicios del calvario asumido clamando por ayuda y justicia en la situación de gravedad extrema de su hijo.

Este debilitamiento de ambas partes en el proceso se visualiza debido a la actuación tardía, tanto en la presentación de la demanda por parte del representante de la víctima frente a la Comisión Interamericana, como en la calificación y acreditación de la misma frente a la Corte Interamericana, tardía en extremo puesto que, por más de quince años no existió un pronunciamiento oficial sobre este caso, ocasionando de este modo que el Estado ecuatoriano argumentara probablemente sin las pruebas necesarias y la investigación que se debió realizar para esclarecer los hechos se vuelva insuficiente.

Probablemente sea por este hecho que el Estado ecuatoriano entre sus argumentaciones haya presentado la prescripción de los hechos, debido a que, como ya se explicó en párrafos anteriores, los delitos cometidos en contra de Pedro Vera Vera como el asesinato por un lado y el homicidio culposo por otro, resulten prescritos y su persecución no logre los resultados deseados por la justicia.

El Estado ecuatoriano deberá cuestionarse la mejora en la aplicación de su normativa de tal modo que los sistemas penitenciarios y sistemas carcelarios internos deberían encontrarse en continuo mejoramiento, de tal manera que tanto para la sociedad como para los detenidos signifiquen una garantía, igualmente los hospitales públicos y la atención médica, deben garantizar la debida y adecuada atención a cualquier individuo y bajo cualquier circunstancia.

ANEXO I

ENTRADA EN VIGOR: 18 de julio de 1978, conforme el Art. 74 de la Convención.

DEPOSITARIO: Secretaría General de la OEA (Instrumento original y ratificaciones).

TEXTO: Serie sobre Tratados, OEA, No. 36.

REGISTRO ONU: 27 de agosto de 1979, No 17955.

PAISES SIGNATARIOS	FIRMA	DEPÓSITO/RATIFICACIÓN	ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE
<i>Antigua y Barbuda</i>	-	-	-
<i>Argentina</i>	<i>2 de febrero de 1984</i>	<i>5 de septiembre de 1984</i>	<i>5 de septiembre de 1984</i>
<i>Bahamas</i>	-	-	-
<i>Barbados</i>	<i>20 de junio de 1978</i>	<i>27 de noviembre de 1982</i>	<i>4 de junio de 2000</i>
<i>Belize</i>	-	-	-
<i>Bolivia</i>	-	<i>19 de julio de 1979</i>	<i>27 de julio de 1993</i>
<i>Brasil</i>	-	<i>25 de septiembre de 1992</i>	<i>10 de diciembre de 1998</i>
<i>Canadá</i>	-	-	-

<i>Chile</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>21 de agosto de 1990</i>	<i>21 de agosto de 1990</i>
<i>Colombia</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>31 de julio de 1973</i>	<i>21 de junio de 1985</i>
<i>Costa Rica</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>8 de abril de 1970</i>	<i>2 de julio de 1980</i>
<i>Dominica</i>	<i>-</i>	<i>11 de junio de 1993</i>	<i>-</i>
<i>Ecuador</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>28 de diciembre de 1977</i>	<i>13 de agosto de 1984</i>
<i>El Salvador</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>23 de junio de 1978</i>	<i>6 de junio de 1995</i>
<i>Estados Unidos</i>	<i>1 de junio de 1977</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Granada</i>	<i>14 de julio de 1978</i>	<i>18 de julio de 1978</i>	<i>-</i>
<i>Guatemala</i>	<i>22 de</i>	<i>25 de mayo de 1978</i>	<i>9 de marzo de 1987</i>

	<i>noviembre de 1969</i>		
<i>Guyana</i>	-	-	-
<i>Haití</i>	-	<i>27 de septiembre de 1977</i>	<i>20 de marzo de 1998</i>
<i>Honduras</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>8 de septiembre de 1977</i>	<i>9 de septiembre de 1981</i>
<i>Jamaica</i>	<i>16 de septiembre de 1977</i>	<i>7 de agosto de 1978</i>	-
<i>México</i>	-	<i>3 de abril de 1982</i>	<i>16 de diciembre de 1998</i>
<i>Nicaragua</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>25 de septiembre de 1979</i>	<i>12 de febrero de 1991</i>
<i>Panamá</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>22 de junio de 1978</i>	<i>9 de mayo de 1990</i>
<i>Paraguay</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>24 de agosto de 1989</i>	<i>26 de marzo de 1993</i>
<i>Perú</i>	<i>27 de julio de</i>	<i>28 de julio de 1978</i>	<i>21 de enero de 1981</i>

	<i>1977</i>		
<i>República Dominicana</i>	<i>7 de septiembre de 1977</i>	<i>19 de abril de 1978</i>	<i>25 de marzo de 1999</i>
<i>Saint Kitts y Nevis</i>	-	-	-
<i>San Vicente y las Granadinas</i>	-	-	-
<i>Santa Lucía</i>	-	-	-
<i>Suriname</i>	-	<i>12 de noviembre de 1987</i>	<i>12 de noviembre de 1987</i>
<i>Trinidad y Tobago</i>	-	<i>28 de mayo de 1991</i>	<i>28 de mayo de 1991</i>
<i>Uruguay</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>19 de abril de 1985</i>	<i>19 de abril de 1985</i>
<i>Venezuela</i>	<i>22 de noviembre de 1969</i>	<i>9 de agosto de 1977</i>	<i>24 de junio de 1981</i>

El Ecuador como país independiente, libre y soberano, voluntariamente accede a formar parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, acogándose de esta manera a sus preceptos y sometiéndose de igual modo a las decisiones que sobre casos de violación de los derechos humanos que se podrían presentar. Otorgándose de este modo la

facultad de denunciar ante la Comisión Interamericana encargada de receptor los casos y de que esta los presente ante la Corte Interamericana para su resolución, y obligándose igualmente al cumplimiento de las normas impuestas.

BIBLIOGRAFÍA:

PRINCIPAL

- a) Aguiar, A; *“Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado”*; Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana. Publicaciones UCAB. 1997.
- b) CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo; *“DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS”*, Editorial HELIASTA.
- c) COBO DEL ROSAL, Manuel y BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; *“COMENTARIOS A LA LEGISLACIÓN PENAL”*, Editorial Revista de Derecho Privado.
- d) FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor; **INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS**, *“El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, Aspectos Institucionales y Procesales”* Segunda Edición, San José C.R. IIDH (Instituto Ecuatoriano de Derechos Humanos), 1999.
- e) LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, *“Un cuarto de Siglo: 1979-2004”*, EDITORAMA S.A., Primera Edición, 2005.
- f) **MANUAL BÁSICO DE LITIGIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES**, Editorial Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador, San Salvador-El Salvador, 2011.
- g) ONECA, J. Antón; *“ESTUDIOS PENALES”*, Ediciones Universidad de Salamanca, 1982.
- h) **ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS COMISIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CORTE AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**, *“Documentos básicos en materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano”*, Secretaría General Organización de los Estados Americanos 1889 F St N.W. Washington D.C 20006 /2001.
- i) ROJAS, Nerio; *“MEDICINA LEGAL”*, Librería y Editorial *“EL ATENEÓ”*, Buenos Aires-Argentina, 1950.

- j) **SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL**, Konrad Adenauer Stiftung, 2010, Berlín.

SECUNDARIA

Normativa:

- a) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008, modificado el 13 de julio de 2011.
- b) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Registro Oficial No. 1, de 11 de agosto de 1998.
- c) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Cuarta de la Ley Reformativa de la Constitución Política del Estado, promulgada en el Registro Oficial N.º 569 de 1.º de septiembre de 1983.
- d) CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Acuerdo Ministerial 202, Registro Oficial 801 de 06 de Agosto de 1984.
- e) CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, Codificación 1267, Registro Oficial Suplemento 153 de 25 de noviembre de 2005.
- f) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Decreto Legislativo 134, Registro Oficial 511 de 10 de junio de 1983.
- g) CÓDIGO PENAL, Registro Oficial Suplemento No 160 de 29 de marzo de 2010.
- h) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Convenio 0, Registro Auténtico 1948 de 10 de diciembre de 1948.

Jurisprudencia:

- a) CASO ALBÁN CORNEJO Y OTROS VS ECUADOR.

- b) CASO GOMES LUND Y OTROS (GUERRILHA DO ARAGUAIA) VS BRASIL.
- c) CASO GELMAN VS URUGUAY.
- d) CASO IBSEN CÁRDENAS E IBSEN PEÑA VS BOLIVIA.
- e) CASO VERA VERA Y OTROS VS ECUADOR.
- f) CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Cit. “PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS (recopilados con ocasión del XXX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), Quito, 1978.
- g) JURISPRUDENCIA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS, CASO VERA VERA, Resolución 0, Registro Oficial 530 de 08 de septiembre de 2011.
- h) REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
- i) RESOLUCIÓN 56/83 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
- j) SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA CASOS “Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil.”, “Gelman Vs Uruguay”.

COMPLEMENTARIA

- Internet Explorer.
- <http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec>
- <http://www.derechoecuador.com>.
- http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp.
- <http://www.un.org/spanish/geninfo/faq/hr2.htm>.
- http://www.oas.org/es/acerca/comision_derechos_humanos.asp.

- EXPRESIONES Y AFORISMOS JURÍDICOS LATINOS
<http://bonfante.wordpress.com/2007/04/18/expresiones-y-aforismos-juridicos-latinos>.
- <http://es.wikipedia.org>.
- <http://lema.rae.es/drae>.
- RAZÓN Y PALABRA; Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación; “Comunicación y Derechos Humanos”, número 81, noviembre de 2012 – enero de 2013, www.razonypalabra.org.mx.

ÍNDICE

CERTIFICACIÓN.

AGRADECIMIENTO.

DEDICATORIA.

SINTESIS.

ESQUEMA.

INTRODUCCIÓN.

CAPÍTULO I	1
1.1 SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.....	1
1.2 COMPETENCIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	3
1.2.1 Comisión Interamericana Sobre Derechos Humanos	3
1.2.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	8
1.3 SUJECIÓN DEL ECUADOR A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.....	11
1.4 TRATADOS, CONVENCIONES Y CONVENIOS SOBRE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.....	12
a) Declaración Universal de Derechos Humanos	13

b) Convención Interamericana sobre Derechos Humanos	14
c) Convenio Interamericano para prevenir y sancionar la tortura	15
d) Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos	16
e) Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes .	19

CAPÍTULO II HECHOS, DILIGENCIAS Y PRÁCTICAS DEL CASO VERA VERA Y OTRA.....	21
2.1 DEMANDA, PETICIONES	21
2.1.1 Antecedentes	21
2.1.2 Demanda	26
2.1.3 Procedimiento Interno.....	26
2.2 AUDIENCIA INTERVENCIÓN DE LAS PARTES (TESTIGOS, PERITOS, EL ESTADO ECUATORIANO).....	30
2.2.1 Alegatos: Estado Ecuatoriano	31
2.2.2 Alegatos, Observaciones: La Comisión Interamericana	32
2.2.3 Alegatos: Representante de Pedro Miguel Vera Vera.....	33
2.2.4 Intervención de las partes, testigos, peritos. Prueba Documental Testimonial y pericial.....	34

2.3 CONSIDERACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DERECHOS HUMANOS	37
2.4 PRESCRIPCIÓN DEL CASO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA	40
2.5 SENTENCIA	43
2.6 DERECHOS VULNERADOS	45
2.6.1 Fundamentos Jurídicos de la Sentencia	51
2.6.2 Análisis de la sentencia	52
2.7 EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA	55
2.8 PUNTOS RESOLUTIVOS	56
2.9 MEDIDAS DE REPARACIÓN	58
2.10 CUMPLIMIENTO DEL ECUADOR DE LA SENTENCIA	65
CAPÍTULO III CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS	69
3.1 FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA Y OPORTUNA	69
3.2 FALTA DE INVESTIGACIÓN EN ECUADOR DE LAS CAUSAS DE MUERTE	71
3.3 FALTA DE EXCLARECIMIENTO DE LOS RESPONSABLES POR EL FALLECIMIENTO DE PEDRO VERA VERA	73

3.3.1 Intervención de la Policía en la Detención.....	74
3.3.2 Intervención del Centro de Rehabilitación Social.....	75
3.4 SUFRIMIENTO QUE PADECIÓ LA SEÑORA FRANCISCA MERCEDES VERA VALDEZ POR EL TRATO DISPENSADO A SU HIJO EL SEÑOR VERA VERA	77
CONCLUSIONES	80
POSICIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO POSTERIOR A LA SENTENCIA	80
ANEXOS.	
BIBLIOGRAFÍA.	
ÍNDICE.	